

**Iniciativa de recuperación ante desastres
U.S. Department of Housing and Urban Development
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD)**

[Expediente No. FR-5051-N-01]

Registro Federal / Volumen 71, Número 29

**Department of Defense Appropriations Act, 2006
(Ley de partidas del Departamento de defensa, 2006)**

**Louisiana Office of Community Development
(Oficina de desarrollo comunitario de Louisiana),
Division of Administration
(División de administración)**

**Plan de acción para el uso de los fondos de
recuperación ante desastres**



**Kathleen Babineaux Blanco
Governor**

**Mitch Landrieu
Lieutenant Governor**

**Jerry Luke LeBlanc
Commissioner of Administration**

**Division of Administration
1201 North Third Street, Suite 7-270
P.O. Box 94095
Baton Rouge, LA 70804-9095
<http://www.doa.louisiana.gov/cdbg/cdbg.htm>**

CONTENIDO

Impacto de los huracanes Katrina y Rita en el estado de Louisiana.....	3
<i>Impacto sobre la infraestructura</i>	6
<i>Impacto sobre la disponibilidad de viviendas</i>	8
<i>Impacto sobre la economía.....</i>	9
Respuesta federal, estatal y de las organizaciones sin fines de lucro a los huracanes	12
<i>Respuesta del estado.....</i>	12
<i>Situación del Presupuesto Estatal de Louisiana.....</i>	16
<i>Asistencia Federal ante Desastres.....</i>	18
<i>Paquete de ayuda para la Costa del Golfo.....</i>	19
<i>Recursos aportados por fundaciones.....</i>	21
Promoción estatal de planificación de recuperación de corto y largo plazo.....	22
Promoción estatal a las construcciones de calidad	27
Albergues de emergencia/viviendas de transición	30
<i>Prevención</i>	31
<i>De la vivienda de transición a la definitiva</i>	32
<i>Personas con necesidades especiales</i>	35
<i>Monitoreo de las actividades</i>	36
Programas CDBG.....	37
<i>Programas de infraestructura.....</i>	39
<i>Desarrollo económico (Programa de préstamo puente de Louisiana)</i>	42
<i>Programas de vivienda</i>	44
<i>Política de desplazamiento</i>	44
<i>Programa de restauración, reconstrucción y reparación para propietarios de vivienda.....</i>	45
<i>Administración.....</i>	46
<i>Planificación.....</i>	46
<i>Asistencia técnica.....</i>	47
Administración de subsidios	47
<i>Procesos en práctica para evitar fraudes, abusos y mala administración.....</i>	48
<i>Participación ciudadana.....</i>	49
Referencias	53
APÉNDICE 1: Cálculos estimados de población	
APÉNDICE 2: Necesidades de infraestructura	
APÉNDICE 3: Datos de evaluación de daños sufridos por las viviendas	
APÉNDICE 4: Definición de zonas afectadas	
APÉNDICE 5: Estimación de daños sufridos por las viviendas	
APÉNDICE 6: Plan de evaluación y supervisión del programa	
APÉNDICE 7: Árbol de decisión de criterios para asignar prioridades	
APÉNDICE 8: Zonas de impacto del huracán (Katrina/Rita)	
APÉNDICE 9: Memorando de entendimiento (MOU)	
APÉNDICE 10: Plan de participación ciudadana	

PLAN DE ACCIÓN

Impacto de los huracanes Katrina y Rita en el estado de Louisiana

El huracán Katrina azotó el estado de Louisiana el 29 de agosto de 2005, mientras que Rita desató su furia sobre el estado el 24 de septiembre de 2005. Fueron, respectivamente, el tercero y el cuarto huracán de Categoría 5 de la temporada de huracanes de 2005. Si bien aún no se conocen las cifras finales, el Huracán Karina podría catalogarse como la tercera tormenta, en cantidad de víctimas, y la más costosa en la historia de los estados Unidos. Si bien el huracán Rita dejó un menor número de muertos, fue el segundo huracán en intensidad de la temporada 2005 y el cuarto que jamás haya atravesado la Cuenca del Atlántico. Juntas, ambas tormentas, sembraron la destrucción con características catastróficas sobre la costa de Louisiana, dando como resultado una enorme carga sobre los recursos materiales, financieros y emocionales de miles de habitantes de Louisiana.

Si bien el impacto sobre la población fue generalizado sin importar el nivel de ingresos y nivel social de los afectados, los efectos sobre los más pobres fueron mucho más devastadores, en especial en el condado o parish de Orleans, donde el Censo de los estados Unidos de 2000 informa de un índice de propiedad de vivienda de apenas 46.5 % (en comparación con el 67.9 % que ostenta el estado), un nivel medio de ingresos anuales de \$ 27,133 (en comparación con \$ 32,566 en el estado) y un índice de pobreza del 27.9 % (en comparación con el índice estatal del 19.6 %). Contrariamente, aunque los parish de Calcasieu, Cameron, Plaquemines y St. Bernard sufrieron mayores daños, el índice de propietarios de vivienda en ellos era mucho mayor (entre el 71 y el 85 %), sus ingresos medios también eran superiores (entre \$ 34,000 y \$ 38,000) y los índices de pobreza eran menores (del 12 al 18 %).

La concentración de pobres en vecindarios de extrema pobreza exacerbó el impacto negativo de la catástrofe sobre los pobres, en especial en New Orleans. De acuerdo con la Brookings Institution (octubre de 2005), uno de cada cuatro vecindarios de la ciudad de New Orleans era clasificado como de “extrema pobreza”, donde al menos el 40 % de sus residentes vive bajo el umbral de pobreza nacional. Estos 47 vecindarios concentraban a casi 100,000 residentes y tenían un ingreso por grupo familiar promedio inferior al promedio de la Ciudad en más de \$ 17,000. El Congressional Research Service (CRS - Servicio de investigación del Congreso) calcula que el índice de pobreza en las zonas anegadas y dañadas del estado de Louisiana era del 21.4 %, confirmando el sentimiento generalizado de que los barrios con mayor índice de pobreza fueron inundados en una proporción significativamente mayor (CRS, 4 de noviembre de 2005).

El impacto social también fue mucho mayor para los más indefensos antes de ocurrir a las tormentas. Estas personas tenían menor participación y conexión con la fuerza de trabajo, sufrían de desventajas educacionales, eran ancianos o discapacitados o bien, niños. Se calcula que cerca de 90,000 personas de 65 años o más fueron evacuadas por las tormentas, muchas de las cuales vivían solas o sufrían al menos una discapacidad. Las personas mayores evacuadas también eran pobres (un 15 % según estimaciones) y una cuarta parte de ellas no contaba con vehículo para movilizarse. El índice de pobreza infantil de las áreas afectadas por los huracanes superaba el 30 % (CRS, 4 de noviembre de 2005). La precariedad de las poblaciones más afectadas impone una carga mayor sobre los recursos federales, estatales y locales disponibles para esfuerzos de recuperación. Ya antes de los huracanes, las precarias condiciones de la población afectada constituían una seria amenaza a los recursos estatales y locales de Louisiana haciendo que la necesidad de asistencia federal resultara incluso más crítica.

El impacto financiero actual y proyectado de los huracanes Rita y Katrina sobre el estado de Louisiana ha alcanzado las decenas de miles de millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de numerosos grupos, instituciones de investigación y agencias gubernamentales. Dada la magnitud de los daños, existe una gran incertidumbre respecto de las estimaciones del impacto en la propiedad, los gobiernos y la economía en general. Las grandes diferencias en las estimaciones de las distintas organizaciones plantean un desafío mayor para el estado para evaluar las necesidades y los recursos necesarios para satisfacerlas.

Por ejemplo, según estimaciones preliminares de la Louisiana Recovery Authority (LRA – Autoridad de recuperación de Louisiana), el organismo coordinador de los esfuerzos de recuperación de todo el estado, los huracanes de 2005 tuvieron un impacto de 75 a 100 mil millones de dólares sobre la propiedad y la infraestructura, y de 15 a 20 mil millones en servicios de socorro temporal. No obstante, la Federal Emergency Management Agency (FEMA – Agencia federal para el manejo de emergencias) prevé un impacto de \$ 18 a 28 mil millones sobre la propiedad y la infraestructura. Respecto de la economía del estado, la LRA indica que se espera que las tormentas representen pérdidas por valor de \$ 50 a 70 mil millones para la economía de Louisiana (definida como el Producto bruto estatal nominal) y provoquen de \$ 8 a 10 mil millones de pérdidas en los ingresos estatales y locales en los próximos cinco años. Por otro lado, la Louisiana Legislative Fiscal Office (Oficina fiscal legislativa de Louisiana) prevé un impacto de \$ 40 a \$ 60 mil millones sobre la debilitada economía y una reducción de ingresos del orden de los \$ 4 a 8 mil millones.

Incluso antes de los huracanes, el estado se encontraba en una situación precaria, con muchas necesidades desatendidas en las áreas de infraestructura, educación, inversión económica, atención de la salud y servicios sociales. El impacto de las tormentas sobre el presupuesto ejecutivo y los ingresos estatales dificulta aun más abordar las necesidades críticas provocadas por los huracanes sin una

sustancial ayuda del gobierno federal. La Louisiana Division of Administration (DOA – División de administración de Louisiana) proyectó que el Presupuesto estatal para el año fiscal (SFY) 2005-2006 se vio afectado en \$ 1 a 1.5 mil millones, por lo que se debe reducir en aproximadamente en mil millones el gasto presupuestario del estado. Se estima un impacto adicional de \$ 4 a 5 mil millones para los años venideros hasta el 2009 inclusive. La situación de los gobiernos locales de las distintas ciudades y parish no es mucho mejor, con un déficit de aproximadamente \$ 4 a 5 mil millones hasta el año 2009 inclusive. Estas cifras no consideran la igualación de financiamiento proporcionada por FEMA que aún se necesita.

Las principales firmas de calificación han reducido la calificación crediticia de los bonos de obligaciones generales del estado y la deuda en poder de gobiernos locales y entidades cuasi gubernamentales enfrenta un serio riesgo de mora. Si bien el gobierno local goza aún de relativa buena liquidez y de la posibilidad de obtener préstamos de diversos fondos para hacer frente a sus vencimientos de bonos, los gobiernos locales enfrentan la pérdida de ingresos por impuestos a la propiedad y a las ventas, y probablemente no estén en condiciones de generar otros ingresos para cancelar los bonos emitidos.

Las tormentas de 2005 dieron como resultado la evacuación de más de 780,000 personas. Al mes de enero de 2006, 586,000 de los evacuados no habían regresado al estado. Si se comparan estas cifras con la estimación de la población del Censo de los estados Unidos de julio de 2005 de 4.5 millones, la población total del estado se habría reducido en un 8.4 %, por lo cual, se estima que hoy es de 4.1 millones, tal como se muestra en el Apéndice 1 [LA Department of Health and Hospitals (Departamento de salud y hospitales de LA {Louisiana}), estimación de enero de 2006]. Varios de los parish más devastados aún tienen poblaciones reducidas. Los datos poblacionales de enero de 2006, comparados con las estimaciones de 2005, revelan lo siguiente: Cameron (-17.8 %); Jefferson (-20.6 %); Orleans (-65.9 %); Plaquemines (-41.1 %); y St. Bernard (-89.7 %). Estas cifras encubren el hecho de que muchos de los residentes actuales de los distintos parish son personas que trabajan en los esfuerzos de recuperación y no necesariamente residentes originales.

Según la FEMA, la cantidad total de solicitantes de asistencia a la FEMA relacionada con los huracanes Katrina y Rita era de 1.89 millones al 10 de enero de 2006. Estas personas han recibido asistencia individual, por ejemplo, ropa, alimentos, y alojamiento temporal, según se describe más abajo. Se necesitan recursos adicionales para las 900 familias o 2700 personas, aproximadamente, que han agotado la asistencia de permanencia en hoteles subsidiada al 7 de febrero de 2006.

Impacto sobre la infraestructura

Las tormentas han afectado significativamente la infraestructura de nuestras comunidades, algunas de las cuales aún sufren la falta de servicio eléctrico, telefónico y de gas. Se estima que el impacto total en carreteras, puentes y servicios públicos, que incluye la remoción de escombros, alcanza los 15 a 18 mil millones.

Al 17 de octubre de 2005, los parish más afectados aún tenían elevados porcentajes de falta de servicios, tales como el 42 % en Orleans, más del 63 % en Cameron, 69 % en Plaquemines y 100 % en St. Bernard. El servicio telefónico se presta de forma errática, con porcentajes de usuarios desprovistos del servicio que alcanzan el 60 % en Orleans, el 100 % en St. Bernard y el 24 % en Plaquemines. Éstos son los parish cuya infraestructura exige grandes reparaciones o que debe ser reconstruida antes para poder restablecer el suministro eléctrico. [Fuente: Emergency Operations Center (Centro de operaciones de emergencia), Informe de cortes de servicios, 17 de octubre de 2005]. Sólo se dispone de \$ 405 millones a través de los fondos de FEMA y compañías de seguros para cubrir el total proyectado de \$ 1.89 mil millones necesarios para restablecer la infraestructura de electricidad, gas y telecomunicaciones (véase el Apéndice 2). Según evaluaciones de la LRA; el costo de restablecer diques y represas a los niveles previos a Katrina sería de \$ 3 mil millones, sin incluir los \$20 a 30 mil millones necesarios para lograr protección contra huracanes Categoría 5 y la restauración de la línea costera.

Veintitrés instalaciones de tratamiento de aguas residuales de propiedad de organismos públicos y trece de propiedad privada se encuentran (al 6 de febrero) en diversas etapas de recuperación, desde aquellas incapaces de funcionar por completo hasta las que funcionan con dificultad. El costo estimado de restablecer los sistemas de tratamiento de aguas residuales severamente dañados por las crecidas, inundaciones o el viento supera los \$ 1.78 mil millones según el LA Department of Environmental Quality (Departamento de calidad ambiental de LA) y la LRA. Si bien la FEMA se hará cargo de aproximadamente \$ 1.4 mil millones de esos costos, y las compañías de seguro de otros \$ 21 millones, aún queda una brecha de \$ 341 millones que se deben reunir para restaurar este componente crítico de infraestructura. Esto hace que el total de los costos no cubiertos por FEMA para restaurar estos dos componentes de infraestructura (agua potable y aguas residuales) alcance los \$ 389 millones.

Otros de los costos significativos no contemplados por FEMA sería el de la reconstrucción de 20 comunidades costeras sin servicio de drenaje (con un costo estimado de \$ 60 millones), los costos para operar sistemas de aguas residuales públicos y privados hasta que regrese la población (por el momento desconocido, aunque se cree que son significativos sobre la base de experiencias previas de FEMA) y los impactos indirectos sobre los sistemas existentes debido a variaciones migratorias de la población (desconocido).

Ambos huracanes generaron una enorme cantidad de desechos (Katrina dejó un saldo de 22 millones de toneladas o 55 millones de yardas cúbicas mientras que Rita dejó 2.6 millones de toneladas o 6 millones de yardas cúbicas). Entre los desechos se incluyen los de carácter vegetal, de construcción, de demolición y madereros. La disposición de electrodomésticos, vehículos, residuos peligrosos y productos electrónicos hogareños inservibles asociados con el proceso de gestión de desechos se realiza sobre la base del método de reciclaje. La capacidad limitada de los terrenos para disposición de desechos, así como los problemas logísticos de ubicación y transporte tienen serias implicaciones sobre la eficacia y eficiencia del proceso de remoción.

Los edificios estatales sufrieron daños por aproximadamente \$ 1.75 mil millones como resultado de Katrina y Rita: \$ 1.71 mil millones por Katrina y \$ 43 millones por Rita, según cifras aportadas por la Louisiana Office of Facility Planning (Oficina de planificación de instalaciones de Louisiana). El financiamiento de las reparaciones por parte del programa de asistencia pública de FEMA exigirá un aporte equivalente por parte del estado. Los fondos de indemnizaciones de seguros del estado, disponibles por separado para cada catástrofe, ascienden a \$ 500 millones, \$ 200 de los cuales corresponden a la interrupción de la actividad gubernamental. De tal modo, los costos de reparación de edificios dañados por Katrina que no se pueden cubrir ascienden a aproximadamente \$ 1.5 mil millones. Según lo informado por la LRA, al 12 de diciembre de 2005, varias asociaciones de hospitales informaban de que 10 hospitales y centros de atención móviles se habían cerrado, y que 3 de ellos habían anunciado su intención de no reabrir sus puertas. En el estado, la cantidad de camas de las instalaciones cerradas ascendería a 2,623.

El Louisiana Department of Health and Hospitals (LDHH – Departamento de salud y hospitales de Louisiana) indica que al 15 de febrero de 2006, existen ciertos componentes de 3 grandes sistemas de agua superficiales en el sureste de Louisiana que funcionan con recomendaciones de hervirla; 5 están clasificados como activos aunque deben reconstruirse y 63 como inactivos (sin planes de volver a habilitarlos). Las estimaciones de daños a los sistemas de agua potable compiladas por el LDHH indican que se necesitan \$ 390 millones para reparaciones del sistema, y el 90 % de dicho gasto puede ser financiado por FEMA. Los \$ 39 millones que restan representan la participación de Louisiana en los costos de reparación.

El Louisiana Department of Education (Departamento de educación de Louisiana) indica que al 9 de enero de 2006, el diecisiete por ciento (17 %) o más de 110,262 de los alumnos inscritos en escuelas de jardín de niños a decimosegundo grado (K-12) en Louisiana, han sido evacuados de sus hogares originales. Las cifras del 17 de noviembre de 2005 indican que se cree que otros 72,000 han sido evacuados fuera del estado. El número estimado de escuelas dañadas supera las 830 mientras que otras 40 fueron completamente destruidas según la LRA. En el caso de instituciones de enseñanza postsecundaria, 12

universidades fueron destruidas o dañadas y el 34 % del alumnado permanece evacuado, con un poco menos de los dos tercios sin informar de su regreso a la escuela. No sólo los estudiantes han sido evacuados, sino que la recuperación se ve afectada también por la evacuación de maestros y el cuerpo docente. La pérdida estimada de ingresos a campus universitarios públicos supera los \$ 150 millones mientras que el daño a instalaciones e infraestructura podría ser del orden de los \$ 400 a 500 millones.

Impacto sobre la disponibilidad de viviendas

La Congressional Budget Office (CBO – Oficina de presupuesto del Congreso) estima que los huracanes convirtieron el 0.2 por ciento de las viviendas de la nación en inhabitables (CBO, Carta al Presidente del Comité, 29 de septiembre de 2005). La Office of Gulf Coast Rebuilding (Oficina de reconstrucción de la Costa del Golfo) del Presidente Bush estima que el impacto de los temporales sobre la disponibilidad de viviendas varía de 338,038 (propietarios de viviendas que sufrieron algún daño) a más de 599,703 (si se incluyen unidades de alquiler y también viviendas ocupadas por sus propietarios). Se estima que 127,969 viviendas ocupadas por sus dueños sufrieron daños importantes o significativos, mientras que 210,069 sólo sufrieron daños menores. En el caso de las viviendas de alquiler, el desglose es de 133,367 unidades severamente afectadas y 128,298 con daños menores. La LRA estima que el costo para reparar o reconstruir las viviendas dañadas, y para reemplazar todos los demás bienes perdidos tales como vehículos, botes, artículos del hogar, etc. fluctúa entre \$ 27 y 35 mil millones. Se estima que más de 780,00 residentes han sido evacuados. La Louisiana Housing Finance Agency (LHFA – Agencia de financiamiento para la vivienda de Louisiana) evalúa las unidades habitacionales inundadas por ambos huracanes en más de \$ 32 mil millones, y contempla que la necesidad de proyectos habitacionales para personas de bajos ingresos rondará las 115,000 unidades.

La gran cantidad de familias evacuadas acentúa la responsabilidad de proporcionar alojamiento temporal en la forma de casas rodantes, casas remolque, hoteles y asistencia para alquileres. Existen aproximadamente 10,000 familias en casas rodantes y otras unidades de alojamiento temporal, según estimaciones de la LRA, y más de 160,000 familias evacuadas que viven con familiares o amigos a un costo de \$ 500 millones por mes. Según los datos de registrados en FEMA, las proyecciones de residentes evacuados fuera del estado demuestran que la mayoría se encuentra en los estados de Texas (más de 550,000), Mississippi (más de 290,000), Georgia (37,000 aproximadamente) y Florida (casi 29,000).

Existen indicaciones iniciales para pensar que entre el 25 y el 40 por ciento de los propietarios de la ciudad de New Orleans cuenta con seguro contra inundaciones. Las cifras de la FEMA indican que habían 127,969 viviendas ocupadas por sus dueños que sufrieron daños grandes o importantes, 25,183 o el 19.7 % de las

cuales no tenían seguro (véase el Apéndice 3). Esa cifra hay que compararla con un total de 133,367 unidades de alquiler que sufrieron daños grandes o importantes, de las cuales, 126,568 o el 94.9 % no tenía seguro. Es posible que los solicitantes de préstamos que no tengan seguro se enfrenten a períodos prolongados de desempleo y a mayores dificultades para rehacer sus vidas. Por último, 1,700 hogares, o aproximadamente un tercio de los hogares severa y repetidamente dañados de los Estados Unidos se encuentran en el estado de Louisiana. Se trata de estructuras que han sufrido daños de \$ 1,000 o más en, al menos, cuatro oportunidades o que sufrieron daños de más del 50 por ciento de su valor en dos o más ocasiones.

Se dispone de estimaciones para la ciudad de New Orleans respecto del impacto del Huracán Katrina sobre las viviendas ocupadas por personas de ingresos bajos a moderados, que se definen como aquellos que se encuentra por debajo del 80 % del promedio de ingresos medios (AMI, por sus siglas en inglés). Dichas estimaciones, realizadas por el Greater New Orleans Community Development Center (Centro de desarrollo comunitario del Gran New Orleans) demuestran que el 65 % de las viviendas ocupadas por sus propietarios que fueron dañadas o destruidas pertenecían a familias de ingresos moderados. Familias de ingresos bajos a moderados alquilaban el 89 % de las viviendas de alquiler que fueron dañadas o destruidas. Se estima que un total de 119,770 viviendas ocupadas por sus propietarios o de alquiler, que albergaban personas de ingresos bajos a moderados, o el 88.7 %, fueron dañadas o destruidas.

No sólo afectaron los huracanes en gran medida a la disponibilidad de viviendas, sino también a la capacidad de la infraestructura sin fines de lucro y de la industria privada de construcción de viviendas de abordar las necesidades que surgieron de la crisis. Antes de las tormentas de 2005, el sector sin fines de lucro ocupaba al 5.6 % de la fuerza del trabajo total del estado, una parte sustancial de la economía del estado. Un alto porcentaje de esos empleos componía las áreas estadísticas metropolitanas del estado y el 55 % de todos los empleos del sector sin fines lucro correspondía a la industria de la atención de la salud. El hecho de que el 70 % de esos empleos estaban ubicados en los condados más devastados por los huracanes pone en duda la capacidad del estado de ofrecer servicios críticos relacionados no sólo con la vivienda, sino con áreas tales como la atención de la salud, servicios sociales, educación y otras.

Impacto sobre la economía

Los impactos económicos por pérdidas de negocios y daños estructurales aumentan exponencialmente por el desempleo, la reducción de servicios públicos, los costos de las tareas de limpieza y de recuperación, el daño a las cosechas y al ganado y el déficit presupuestario del sector público. De acuerdo con la LRA, el valor total de los negocios y propiedades comerciales perdidos oscilaría entre \$ 25 y \$ 29 mil millones. Las estimaciones de daños a

infraestructura, que incluye carreteras, puentes, servicios públicos y remoción de desechos ascienden a \$ 15 a \$ 18 mil millones. Se piensa que más de 20,000 negocios han sido afectados y que el 90 % de los mismos ha sufrido daños de proporciones catastróficas. Esto representa una cantidad diez veces superior a los negocios afectados en otros estados también golpeados por huracanes. De acuerdo con otra estimación del U.S. Census Bureau (Oficina del Censo de los EE.UU.), el 18.9 % de los negocios de Louisiana se encontraba dentro de la zona de desastre designada por FEMA y un 17.4 % de los negocios en la zona clasificada como "inundada".

Las industrias agrícola y pesquera fueron las más afectadas. El Louisiana Department of Wildlife and Fisheries (Departamento de vida silvestre y pesca de Louisiana) estima que el impacto en la industria de pescados y mariscos estaría entre los \$ 800 y los mil millones. El ochenta y cinco por ciento (85 %) de los "parishes" o condados dedicados a la producción de caña de azúcar del país se vio afectado por las tormentas (CBO, Carta al Presidente del Comité, 29 de septiembre de 2005). El Louisiana State University Agricultural Center (Centro de agricultura de la Universidad estatal de Louisiana) estima que un total de 4.7 mil millones de pies tabla o superficiales y 1.6 millones de acres de árboles maderables se vieron afectados por ambas tormentas. La pérdida total estimada de estos recursos naturales supera los mil millones de dólares. La Congressional Budget Office estima que las pérdidas directas de bienes y servicios comerciables fluctúan entre \$ 28 a \$ 44 mil millones y que la amplia mayoría de las pérdidas de producción se deben a ingresos perdidos de la producción de petróleo y gas y de daños a refinerías.

Los daños a la industria energética también ejercerán presiones sobre los esfuerzos de recuperación de gobiernos locales y estatales ya que tendrán que enfrentar mayores precios de energía. El 25 de enero de 2006, el Mineral Management Service (Servicio de administración de minerales) indicó que el 12 % de las estaciones marinas de perforación cercanas a la costa permanecen evacuadas y que la producción diaria de petróleo en el Golfo de México se encuentra reducida en un cuarto. La CBO proyecta que las empresas de servicios públicos que operan en los estados afectados por ambos huracanes necesitarían \$ 3.5 mil millones en asistencia para compensar los daños y las ventas perdidas. La LRA estima que el impacto sobre las compañías privadas de servicios públicos en Louisiana sería de \$ 1.425 mil millones que no serían reembolsados por la FEMA.

El impacto de las tormentas de 2005 sobre la economía de Louisiana ha sido catastrófico y de larga duración. La publicación Louisiana Economic Outlook (2006 y 2007) sugiere que Katrina y Rita anularon aproximadamente 11 años de crecimiento del empleo en el estado (Scott, L, y Richardson, J., 2005). El Louisiana Department of Labor (LDOL – Departamento de trabajo de Louisiana) informó que al 28 de enero la cantidad de reclamos activos por desempleo producto de los huracanes Katrina y Rita era de 125,895. En noviembre, los

reclamos activos por desempleo alcanzaron su nivel máximo de 284,717 casos. Desde el 27 de noviembre, la cantidad de reclamos activos comenzó a decaer cuando el Departamento de Trabajo volvió a imponer el requisito federal de que el beneficiario debía llamar semanalmente al departamento para informar que había salido a buscar trabajo y que estaba disponible para trabajar.

En diciembre de 2005, la cantidad de empleados de Louisiana ajustada por temporada fue de 1,718,117. La cantidad de desempleados fue de 116,763, con una tasa de 6.4 % [Labor Market Information Bulletin (Boletín de información del mercado de trabajo) de LDOL, fecha de emisión, 25 de enero de 2006). Las cifras comparables de noviembre fueron las siguientes: 1,710,548 empleados y 236,490 desempleados, con una tasa de desempleo del 12.1 %. Parte del drástico cambio operado desde noviembre a diciembre de 2005 se debió a los cambios en los requisitos de informe que ya se mencionaron. Una disminución de 112,159 personas en la fuerza laboral de noviembre a diciembre con la consiguiente disminución de 119,727 almas en la cantidad de desempleados, se deben sin lugar a dudas más a los requisitos de informe que a un aumento significativo en los empleos ofrecidos, que sólo fue de 7,569 durante el período. Tanto la fuerza laboral como la cantidad de empleados de Louisiana aún se encuentran muy por debajo del nivel de diciembre de 2004, en que había una fuerza laboral de 2.07 millones y una cantidad de empleados de 1,952,000.

La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC – Corporación de seguros de depósito federal) informa que inmediatamente después de los huracanes, se perdieron más de 220,000 puestos de trabajo en el estado, siendo la ciudad de New Orleans la que más puestos perdió. No obstante, la creación de nuevos puestos de trabajo comenzó con los esfuerzos de reconstrucción: el estado y New Orleans agregaron 32,000 y 15,000 puestos respectivamente. La rapidez de la recuperación de la economía del estado dependerá en gran medida del uso eficiente y oportuno de todos los recursos, y de la ayuda que el estado pueda obtener.

Las áreas afectadas por Katrina y Rita a las que se hace referencia en este informe son aquellos parish designados por la FEMA hasta el 30 de septiembre de 2005 inclusive. Un área se consideraba “afectada” si había sido designada por FEMA para recibir cualquier tipo de asistencia. Un área se definía como “más afectada” si había sido designada para recibir asistencia individual y *también* pública (véase el Apéndice 4).

Todas las unidades de gobierno local, gobiernos locales con o sin derecho a recibir subsidios obligatorios, y tribus indígenas reconocidas por el gobierno federal reúnen los requisitos para recibir asistencia. No obstante, el financiamiento se dirigirá a aquellas áreas que fueron más afectadas por los huracanes Rita y Katrina. La mayor parte de las partidas asignadas a Louisiana se ha destinado a actividades relacionadas con la vivienda: reparación, reconstrucción o restauración de viviendas dañadas o destruidas por los

huracanes. Debido a la naturaleza misma de esta actividad, el financiamiento se destinará a aquellas unidades de gobiernos locales que fueron más afectadas por los huracanes ya que esas áreas son las que sufrieron mayor destrucción en viviendas e infraestructura. Igual principio se aplica a las partidas asignadas a la reparación de infraestructura. Sobre la base de las evaluaciones de daños a viviendas e infraestructura de los distintos parish proporcionadas por la LRA, se puede apreciar fácilmente que el financiamiento adicional para la recuperación será distribuido entre las áreas más afectadas. (Véase el Apéndice 5).

Respuesta federal, estatal y de las organizaciones sin fines de lucro a los huracanes

Una enorme cantidad de ayuda se distribuyó entre los parish afectados para abordar las acuciantes necesidades surgidas después de los huracanes. Se proporcionó asistencia para alojamiento temporal por un total de \$ 7.5 mil millones para albergar a los evacuados en hoteles y casas rodantes. La FEMA emitió aproximadamente 1.4 millones de cheques de asistencia para alojamiento por un total de 3.2 mil millones y más de 256,000 cheques por otro tipo de asistencia se libraron para responder a necesidades tales como asistencia médica, gastos funerarios y vestimenta. Los gastos en servicios sociales, por ejemplo, desempleo por catástrofe, terapia por crisis y servicios legales provistos totalizaron entre \$ 4.5 y 6 mil millones. La asistencia de emergencia y otros servicios, entre otros, despeje de carreteras, alimentos, etc. totalizaron entre \$3 y 5.5 mil millones. En total, el valor de los servicios de socorro temporal prestados hasta la fecha suma de \$15 a 20 mil millones.

Respuesta del estado

Respuesta financiera de Louisiana a la recuperación tras los huracanes

- La gobernadora Kathleen Babineaux Blanco dictó el decreto ejecutivo KB 2005-38 el 19 de septiembre de 2005, para demorar proactivamente los gastos de estado y conservar recursos estatales en el año fiscal en curso. Con sólo ciertas excepciones limitadas y selectivas, tales como gastos relativos a esfuerzos de recuperación y reconstrucción por daños de los huracanes directos, este decreto prácticamente congeló los gastos y la contratación de personal de las agencias del Poder Ejecutivo hasta el 30 de junio de 2006.
- La administración Blanco dispuso diligentemente garantizar la transparencia contable de las finanzas relacionadas con los fondos federales de recuperación.
 - Estableció códigos de actividad especiales (KATR para el huracán Katrina y RITA para Rita) en el sistema contable de todo el estado y

- que las agencias de educación superior captaran gastos de agencias estatales para tareas de rescate, recuperación y reconstrucción.
- Colocó auditores internos de la Oficina del Inspector Estatal General y de la Oficina del Auditor Legislativo para procesar las solicitudes de FEMA y los reembolsos a las agencias estatales y locales.
 - Trabajó junto con el Tesorero del estado para establecer un proceso de distribución eficiente, sujeto a estrictos protocolos contables y de responsabilidad, para los fondos de reembolso de FEMA distribuidos a gobiernos estatales y locales de Louisiana.
 - Luego de un exhaustivo proceso de búsqueda, se seleccionó a Deloitte & Touche, LLP, una de las cuatro firmas contables más importantes del mundo, para proporcionar servicios contables para la recepción y distribución de los fondos de recuperación de FEMA en Louisiana. Se seleccionó a la firma UHY, LLP para realizar una evaluación independiente de los controles, procesos y procedimientos internos del estado para la recepción y distribución de los fondos de FEMA y para proporcionar asistencia adicional en las áreas de detección, investigación y mitigación de fraudes. Se están redactando los contratos con cada una de las firmas.
- La gobernadora Blanco estableció la LRA por el decreto ejecutivo KBB 2005-63 el 17 de octubre de 2005 para planificar la recuperación y reconstrucción de Louisiana.

La gobernadora Blanco dictó el decreto ejecutivo 2005-63 en respuesta a la necesidad de coordinar, destinar y aprovechar los nuevos recursos federales junto con los recursos tradicionales para, de tal modo, lograr resultados óptimos, mejorar la eficiencia y evitar la duplicación de esfuerzos. El decreto ejecutivo creó la organización denominada LRA, que responde a un consejo directivo, para llevar a cabo las siguientes tareas relacionadas con los esfuerzos de recuperación y reconstrucción tras los huracanes:

Establecer prioridades de corto plazo para la recuperación mediante agendas iniciales de 30 y 100 días y planes de reurbanización de largo plazo, de 1 y 5 años.

Coordinar los esfuerzos entre todos los niveles y poderes del gobierno para desarrollar e implementar los planes.

Identificar fuentes de financiamiento y alternativas innovadoras para financiar la recuperación y la reurbanización.

Establecer prioridades y ofrecer dirección a las agencias y organismos estatales respecto de los fondos puestos a su disposición para la recuperación y para cualquier partida especial del Congreso relacionada con los huracanes Rita y Katrina.

Establecer prioridades, asistir en la planificación comunitaria y coordinar asignaciones de recursos en lo relativo a temas que pueden incluir, entre otros: 1) desarrollo económico y de la fuerza de trabajo; 2) calidad y revisión ambiental; 3) vivienda y alojamiento temporal y permanente; 4) atención médica; 5) infraestructura y transporte; 6) educación; 7) estabilidad fiscal; 8) servicios familiares; y 9) mantener la ley y el orden.

La LRA ha afianzado su posición como centro coordinador de todos los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Louisiana. En una sesión especial de la legislatura de Louisiana que concluyó el 17 de febrero de 2006, se estableció la LRA de forma estatutaria. Según lo dicho por la propia gobernadora Blanco en esa oportunidad: "He creado la Louisiana Recovery Authority para supervisar este esfuerzo de recuperación. El tamaño y la magnitud del desastre hacen necesaria la creación de una agencia para coordinar la recuperación. Nuestros ciudadanos demandan, y el Congreso espera, que tengamos una agencia independiente y apolítica que funcione con los estándares de ética más elevados para supervisar la recuperación".

- La gobernadora Blanco estableció la Louisiana Disaster Recovery Foundation (LDRF – Fundación para la recuperación tras los desastres de Louisiana) para proporcionar recursos para el alivio, recuperación y mejoramiento del pueblo y las comunidades de Louisiana, alimentada por la fuerza de espíritu de los residentes para transformar el desastre en una oportunidad sin precedentes. La fundación presta apoyo y trabaja con organizaciones privadas sin fines de lucro en las áreas de desarrollo económico, vivienda, educación, atención médica y servicios legales.
- La vivienda es un componente clave de la recuperación económica de Louisiana. En uno de los muchos esfuerzos para abordar la crisis habitacional provocada por los huracanes Rita y Katrina, la gobernadora Blanco y la LHFA anunciaron nuevos programas para ayudar a las familias de Louisiana a regresar a sus hogares. Mediante decretos ejecutivos emitidos el 21 de noviembre de 2005, la gobernadora Blanco instruyó a la LHFA a dedicar \$ 195 millones de fondos de bonos para promover la propiedad de viviendas para ciudadanos evacuados y para financiar la reparación y construcción de viviendas de alquiler de bajo precio.
- Debido a la finalización de los albergues financiados por FEMA en febrero de 2006, la gobernadora Blanco instruyó a agencias estatales, incluso el Department of Social Services (Departamento de servicios sociales), el establecimiento de albergues de emergencia y dispuso un número gratuito de asistencia telefónica para ayudar a las víctimas de los huracanes que serían desalojadas de hoteles y moteles. De acuerdo con el Louisiana Hurricane Housing Task Force (Grupo de tareas para la vivienda tras los huracanes), FEMA estima que 900 familias en Louisiana habrán perdido sus privilegios

de permanecer en hoteles el 7 de febrero y otras 2,200 familias el 13 de febrero.

- La administración Blanco proporcionó el subsidio TANF (Temporary Assistance for Needy Families – Asistencia temporal para familias necesitadas) por valor de \$ 32.7 millones al Louisiana Family Recovery Corps (LFRC – Cuerpo de recuperación familiar de Louisiana), una organización independiente sin fines de lucro creada en noviembre de 2005 para coordinar los esfuerzos de recuperación prestados a familias de Louisiana evacuadas con niños.
- Se asignó el Rapid Response Fund (Fondo de respuesta rápida) del estado, por un monto de \$ 10 millones para el desarrollo económico. Se trata de un programa de préstamo para proporcionar alivio inmediato a pequeños negocios en su lucha por la recuperación y reconstrucción.
- La administración Blanco trabajó junto al Interim Emergency Board (Consejo interino de emergencia) del estado para destinar la mayor parte del fondo de emergencia del estado, por un total de \$ 16 millones, a un subsidio de asistencia inmediata para los parish, municipalidades y distritos más gravemente afectados. Como resultado de ello, 22 municipalidades, cuatro parish y cinco oficinas de sheriff recibirán un poco más de \$ 14.6 millones en asistencia provisoria.
- El estado ha enmendado su programa Community Development Block Grant (CDBG – Subsidio en bloque para el desarrollo comunitario) vigente para redirigir los fondos no asignados del proyecto y el fondo de préstamo renovable para el desarrollo económico (aproximadamente \$ 2.85 millones) a necesidades de los gobiernos locales surgidas por la devastación provocada por Katrina y Rita.
- La gobernadora Blanco ha aunado esfuerzos con Operation HOPE para instrumentar el Project Restore HOPE en Louisiana. Este programa está administrado por la división de respuesta y recuperación económica de HOPE, HOPE Coalition America, y ofrece a las víctimas de desastres registradas servicios personales de orientación y asesoramiento financiero mediante asistencia en el sitio, líneas de asistencia telefónicas gratuitas, recursos de información y administración de casos en línea para problemas financieros.
- Para ayudar a los trabajadores evacuados de Louisiana.
 - El decreto ejecutivo KBB 2005-38 instruyó a las agencias estatales a aprovechar al máximo su fuerza de trabajo reasignando empleados estatales evacuados.

- En septiembre, la gobernadora Blanco emitió un decreto ejecutivo anulando la necesidad de reportarse semanalmente para constatar esfuerzos de búsqueda de empleo a las víctimas de Katrina y Rita a fin de que obtuvieran los beneficios del seguro de desempleo. Desde aquel momento, la LDOL ha organizado ferias de trabajo, ofrecido programas de capacitación y utilizado todos los medios posibles para que todos vuelvan a trabajar.
 - Hasta el 10 de octubre de 2005, la LDOL pagó \$ 156,174,727 en reclamos regulares por desempleo (UI, por sus siglas en inglés), a 201,094 ciudadanos de Louisiana ; y \$35,974,730 en asistencia por desempleo por desastre (DUA, por sus siglas en inglés), a 80,716 ciudadanos de Louisiana.
 - En noviembre, los reclamos activos alcanzaron la suma de 284,717. No obstante, los reclamos activos continuaron decaendo desde el 27 de noviembre de 2005, cuando la LDOL volvió a imponer el requisito de que los beneficiarios llamen al departamento semanalmente para informar de que habían intentado buscar trabajo y que estaban disponibles para trabajar.
 - Al 28 de enero de 2006, el número de reclamos activos resultantes de los huracanes Katrina y Rita era de 125,895. Un examen de los reclamos UI y DUA demuestra que 62,770, o el 51 por ciento de los reclamos activos fueron presentado por personas que vivían en Louisiana. El resto, 60,958, o el 49 por ciento, fueron presentados por evacuados que estaban viviendo en otros estados.
- Como resultado de la Sesión legislativa especial de noviembre de 2005, la gobernadora Blanco firmó el proyecto de ley 35 para ampliar el papel del Recovery School District (RSD – Distrito escolar para la recuperación) autorizándolo a determinar qué escuelas funcionarían, cerrarían, se reubicarían o reconstruirían y la cantidad de grados que funcionarían en cada una. Esta ley garantiza que la reapertura de las escuelas esté coordinada con el diseño y la reurbanización de New Orleans a medida que se reconstruye la ciudad y los ciudadanos regresan a sus hogares.
 - Al lunes 13 de febrero de 2006, los gastos informados del estado relacionados con Katrina y Rita (gastos de las agencias estatales con los códigos KATR y RITA) superaban los mil millones de dólares. Los mayores gastos fueron hechos por el Department of Military Affairs (Departamento de asuntos militares), que alberga la Office of Emergency Preparedness (Oficina de preparación para emergencias), la agencia estatal designada para recibir y distribuir los fondos de FEMA. Estos gastos incluyen más de \$ 536 millones en distribuciones de fondos a agencias de gobierno locales por el Department of Military Affairs pero no incluyen la mayoría de los gastos relacionados con los huracanes en la Educación superior y División de servicios de atención médica, que reportaba gastos relacionados con los huracanes por valor de más de \$ 40 millones hasta mediados de noviembre.

Situación del presupuesto estatal de Louisiana

- La Revenue Estimating Conference (Conferencia de estimación de ingresos públicos) de Louisiana se reunió el 28 de octubre de 2005 para revisar la estimación de los ingresos del estado. El pronóstico para el año fiscal 2005-06 se redujo en \$ 970.6 millones de la base de ingresos del Fondo general estatal de \$ 7.3 mil millones. No obstante, debido a un saldo no asignado a partidas del State General Fund (Fondo estatal general) del año fiscal 2005-06 de \$ 1.5 millones y una asignación apartada en el pronóstico del 28 de octubre de \$ 10 millones como reserva para el Rapid Response Fund para el desarrollo económico, la verdadera deficiencia en los ingresos fue de \$ 959.1 millones.
- El 5 de noviembre de 2005, la gobernadora Blanco emitió el decreto ejecutivo 2005-82 para resolver más de \$ 500 millones de este déficit. La estrategia de reducción del déficit de la gobernadora Blanco incluyó también \$ 153.9 millones recurriendo a un tercio del Budget Stabilization Fund ("Rainy Day" Fund – Fondo de estabilización del presupuesto), según lo autoriza la Constitución.
- Estas acciones agotaron la autoridad unilateral de la gobernadora de compensar el déficit de ingresos para el año fiscal 2005-06; fue necesario que la legislatura se reuniera en una asamblea especial para abordar el tema de la deficiencia restante. La Primera sesión extraordinaria de la Legislatura de Louisiana se reunió el 6 de noviembre y se levantó el 22 de noviembre de 2005.
 - En el HB 156 (convertido en la Ley 67), la gobernadora Blanco bosquejó las reducciones necesarias para cubrir la deficiencia restante: mayores cortes presupuestarios hubieran provocado una mayor disrupción de los servicios a los ciudadanos de Louisiana.
 - Como alternativa, la gobernadora esbozó un plan para usar el superávit de \$ 252 millones del año fiscal 2004-05 para reponer el Rainy Day Fund, una de las opciones permitidas para el uso de fondos no recurrentes, para que se alcanzara el límite del fondo. Esto permitiría un flujo de \$ 183.9 millones adicionales por encima del límite al State General Fund.
 - El déficit restante se cubrió mediante cortes presupuestarios adicionales, muchos provenientes de ahorros por uso eficiente, y de otros ahorros y saldos de cuentas sin usar.
 - \$ 98.7 millones en cortes, muchos de ellos provenientes de ahorros por uso eficiente.
 - \$ 2.9 millones en reducciones ofrecidas por los poderes legislativo y judicial.

- \$ 9.2 millones en ahorros adicionales y saldos de cuentas sin utilizar.
- Los gastos críticos para los esfuerzos de recuperación y reconstrucción de Louisiana, el Transportation Trust Fund (Fondo fiduciario para transporte), el Wetlands Conservation & Restoration Fund (Fondo para la conservación y restauración de los humedales), participación en los ingresos, pagos adicionales a policías y bomberos locales, y el Rapid Response Fund no se vieron sujetos a cortes presupuestarios, según el decreto ejecutivo KBB 2005-82 y la Ley 67.

Asistencia federal por desastres

La sección siguiente resume el grado de desembolsos de la asistencia proporcionada bajo la ley Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act al 31 de enero de 2006:

- Se abrieron veintiséis Centros de recuperación por desastres en Louisiana.
- Se asignaron aproximadamente 36,675 remolques y unidades de casas prefabricadas a Louisiana. En total, más de 62,800 unidades son viviendas temporales para víctimas de Katrina, casi el triple de la cantidad de unidades usadas durante todo el año pasado tras los huracanes de la Florida y muy superior a cualquier misión de alojamiento en la historia de la FEMA. Se ocupan diariamente aproximadamente 663 unidades adicionales para responder a una necesidad estimada de 83,000.
- LA Swift, el sistema de autobús gratuito de emergencia entre Baton Rouge y New Orleans para residentes evacuados, ha prestado servicio a más de 43,000 usuarios por día desde el 31 de octubre de 2005 con un promedio de 530 usuarios por día.
- Los equipos de asistencia médica para desastres de FEMA atendieron a 49,000 pacientes durante el pico de las operaciones de movimiento de pacientes. El equipo aplicó 65,000 vacunas y ofreció terapia por crisis a 5,800 personas, entre otros servicios médicos.
- Hay más de 81,737 techos dañados que han sido cubiertos temporalmente bajo el programa “Blue Roof” de FEMA operado por el U.S. Army Corps of Engineers.
- Más de 108,000 solicitantes han sido aprobados para recibir asistencia por desempleo a causa de los desastres. Se ha proporcionado un total de \$ 130 millones en asistencia por desempleo a víctimas de huracanes que reúnen los

requisitos en el estado de Louisiana y que se registraron durante el período correspondiente.

- FEMA ha llevado a cabo más de un millón de inspecciones de viviendas. El proceso de inspección incluye un examen completo en busca de daños estructurales.
- FEMA ha suministrado más de \$ 4.5 mil millones a víctimas de Katrina en ayuda financiera y de vivienda a través del programa Individuals and Households Program (IHP – Programa para personas y grupos familiares). Esto es mucho más que los \$ 1.2 mil millones del programa IHP repartidos tras los huracanes de la Florida del año pasado. FEMA proyecta un desembolso por valor de \$ 7.7 mil millones para el programa de ayuda individual y para grupos familiares. Hasta la fecha, FEMA ha librado 1.4 millones de cheques para asistencia de vivienda, totalizando unos \$ 3.2 mil millones. Se han aprobado mil millones de dólares para individuos en concepto de Asistencia por otras necesidades. FEMA ha pagado o reembolsado más de \$ 325 millones en concepto de habitaciones de hoteles y moteles para quienes quedaron sin techo.
- FEMA proyecta otros \$ 17 mil millones en pagos bajo el National Flood Insurance Program (Programa nacional de seguro para inundaciones) a tenedores de pólizas de seguro en Louisiana. Hasta la fecha, se han pagado más de \$ 11 mil millones en Louisiana.
- El U.S. Army Corps of Engineers ha retirado más de 32 millones de yardas cúbicas de desechos. FEMA ha reembolsado al estado el 100 por ciento de los gastos incurridos y continuará haciéndolo hasta el 30 de junio. Se han asignado más de \$ 1.2 mil millones de fondos federales para proyectos de Asistencia pública, tales como remoción de desechos y servicios de emergencia en Louisiana.
- FEMA ha aprobado Préstamos comunitarios por los desastres por valor de \$ 558 millones en Louisiana para ayudar a mantener los servicios esenciales en funcionamiento en las comunidades más golpeadas, que incluye un préstamo de \$ 120 millones a la Ciudad de New Orleans. La SBA (Administración para Negocios Pequeños) ha aprobado más de \$ 2.1 mil millones en préstamos de asistencia por desastre a propietarios de negocios, de viviendas e inquilinos en Louisiana, con un total de 29,800 préstamos.

Paquete de ayuda para la Costa del Golfo

Se asignó un total de \$ 29 mil millones a los estados afectados a los huracanes Katrina, Rita y Wilma, en un paquete de socorro tras los huracanes aprobado a fines de 2005. Esa suma se deberá repartir entre diferentes grupos de residentes

en seis estados que fueron afectados por huracanes en el año 2005. A continuación, se desglosa la cantidad de financiamiento por finalidad específica. Cuando se dispone de tal información, se indica la asignación del estado.

A continuación, se enumeran los programas a los que recurrirá el estado de Louisiana para solicitar financiamiento a fin de cubrir las necesidades:

- *Recuperación y desarrollo rural*

Un total de \$ 618 millones para asistir a granjeros y campesinos afectados por los recientes huracanes y para reconstruir las comunidades rurales se ha asignado de la siguiente manera:

\$200 millones para el Emergency Conservation Program (Programa de conservación de emergencia) para que los granjeros y campesinos puedan rehabilitar las tierras cultivables dañadas por los huracanes de 2005;

\$300 millones para que el programa Emergency Watershed Protection (Protección de emergencia a cuencas hidrológicas) realice tareas de recuperación de emergencia en vías de agua o cuencas hidrológicas;

\$118 millones para asistir a las comunidades rurales a reparar y reconstruir viviendas, sistemas de suministro de agua y de drenaje, instalaciones comunitarias e infraestructura eléctrica.

- El paquete contempla \$ 4.7 mil millones para cubrir los costos y reparar los daños de las instalaciones y para reemplazar equipos de propiedad del Department of Defense y el Department of Homeland Security (Departamentos de Defensa y de Seguridad Nacional).

- El proyecto de ley proporciona \$ 135 millones para reparar daños en parques nacionales, refugios de vida silvestre y bosques, así como también para hacer frente a daños en otras instalaciones del Departamento del Interior, daños en áreas forestales estatales y privadas y para el programa de fugas de tanques subterráneos de almacenamiento administrado por la EPA (Environmental Protection Agency – Agencia de protección ambiental).

- El Department of Social Services (DSS – Departamento de servicios sociales) recibió una asignación de \$ 220 millones para el subsidio Social Services Block Grant a fin de suministrar servicios de guardería infantil y de salud mental, y otros servicios sociales a personas y comunidades afectadas. La Office of Community Development (OCD – Oficina de desarrollo comunitario) actúa en coordinación con el DSS y el Department of Health and Hospitals (Departamento de salud y hospitales) para determinar las prioridades para lograr que los

servicios de atención a la salud retornen lo más posible al estado normal en muchos de los parish.

- Se proporcionaron \$ 1.6 mil millones para educación sobre recuperación de huracanes. Estos fondos se destinaron a lo siguiente:

\$645 millones para las escuelas afectadas (escuelas que albergaron estudiantes);

\$ 750 millones para escuelas en recuperación (escuelas que fueron severamente afectadas por uno o más huracanes y tienen que reanudar sus actividades);

\$ 5 millones para el Programa de educación para personas sin hogar;

\$ 200 millones para educación superior (se asignaron \$ 95 millones al Louisiana Board of Regents – Consejo de regentes de Louisiana).

- Subsidio de emergencia para carreteras: para reparar carreteras, puentes y otro tipo de infraestructura dañados, se proporcionaron \$ 2.75 mil millones, \$ 425 millones por encima del monto solicitado.

- *USDA*

El 26 de enero de 2006, el U.S. Department of Agriculture (USDA – Departamento de Agricultura de los EE.UU.) anunció una ayuda de \$ 2.8 mil millones para las víctimas de la temporada de huracanes 2005. El USDA proporcionará \$ 1.2 mil millones en ayuda a productores agropecuarios, principalmente en los estados de Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte y Texas. El USDA realizará pagos por los desastres destinados a granjeros, agricultores y otros por medio de ocho programas distintos. El financiamiento se proporciona por medio de (1) el Párrafo 32 de la Ley del 24 de agosto de 1935 y (2) la Emergency Supplemental Appropriations to Address Hurricanes in the Gulf of Mexico, and Pandemic Influenza Act (Ley de partidas complementarias de emergencia para hacer frente a los huracanes del golfo de México y la pandemia de gripe) de 2006, del Departamento de defensa.

Recursos aportados por fundaciones

Se dispone de recursos adicionales en cantidades limitadas de los sectores privado y de organizaciones sin fines de lucro. Algunos ejemplos son el Bush-Clinton Fund que reunió un total de \$ 100 millones y ha asignado \$ 24.4 millones

al estado hasta la fecha. Se espera que Louisiana reciba el 61 % del financiamiento distribuido por esa fundación. Aproximadamente \$ 13 millones de esa asignación se ofrecerán a instituciones de educación superior para proporcionar partes críticas y faltantes para la recuperación y reconstrucción de la comunidad. La Louisiana Disaster Recovery Foundation continuará apoyando y trabajando junto a organizaciones privadas y sin fines de lucro en las áreas de desarrollo económico, vivienda, educación, atención de la salud y servicios legales concentrados en la reconstrucción.

Promoción estatal de planificación de recuperación de corto y largo plazo

Con el propósito de promover una planificación sólida de la recuperación en el corto y largo plazo, tanto en nivel estatal como local, que tenga un impacto tal sobre las decisiones de uso de las tierras que refleje las necesidades de una administración responsable de las inundaciones y del crecimiento, el estado, a través de la LRA, lidera los esfuerzos de planificación a largo plazo en la mayoría de los parish afectados. Denominado “Louisiana Speaks” (“Louisiana se hace oír”) este esfuerzo es un proceso de planificación multifacético que tiene por finalidad desarrollar una visión sostenible de largo alcance para el Sur de Louisiana, en vistas de la destrucción provocada por los huracanes Katrina y Rita. El proceso de planificación comunitaria lleva a cabo lo siguiente:

- Fomenta un proceso deliberado y democrático que se basa principalmente en la participación activa de todos.
- Faculta a las comunidades locales para que elaboren planes que satisfagan sus necesidades individuales.
- Define prioridades en el nivel local para guiar las decisiones.
- Brinda apoyo a las comunidades poniendo a su disposición los planificadores nacionales más expertos para que colaboren con arquitectos, planificadores e ingenieros locales, y
- Ofrece una interfaz fácil de usar para permitir la creación de planes individuales.

El proceso de planificación de largo plazo de la LRA combinará los esfuerzos de muchos expertos, interesados y grupos en un solo enfoque de tres planos:

- 1) Talleres locales de planificación de recuperación y de diseño
- 2) Desarrollo de un conjunto de herramientas de arquitectura
- 3) Una visión regional de largo plazo

Louisiana Speaks posee cuatro iniciativas clave que se revelarán durante el próximo año:

1. Planes de recuperación de los distintos parish

El objetivo de los planes de recuperación de los parish consiste en elaborar un plan global que integre los planes de recuperación de los parish con el regional (en coordinación con la asistencia técnica de FEMA). La LRA ha colaborado con los planificadores de FEMA para crear un proceso de planificación en el nivel de parish que aborde diversos temas de recuperación referidos a la recuperación de largo plazo de los parish gravemente afectados. Se identificó un total de 26 parish en Louisiana como participantes del proceso de planificación, que abarca desde noviembre de 2005 a marzo de 2006. Los parish siguientes están recibiendo asistencia técnica para bosquejar sus planes: St. Tammany, Orleans, Jefferson,

Plaquemines, Lafourche, Vermilion, Calcasieu, Cameron, Vernon, Beauregard, Allen, Jefferson Davis, Iberia, St. Mary, St. Charles, Tangipahoa, Washington y Sabine. El Louisiana Recovery Planning Day (Día de planificación de la recuperación de Louisiana) fue un hito importante del proceso de planificación en el nivel de parish. El 21 de enero de 2006, que fuera proclamado como el Louisiana Recovery Planning Day por la gobernadora Kathleen Babineaux Blanco, la LRA y el equipo de Long-Term Community Recovery (LTCR – Recuperación comunitaria de largo plazo) de FEMA organizaron una serie de seminarios abiertos para brindar a los residentes de Louisiana la oportunidad de expresar sus deseos y necesidades con el fin de definir una visión para la recuperación de Louisiana basada en la comunidad.

El proceso de planificación en el nivel de parish dará como resultado el desarrollo de planes de recuperación iniciales, que luego se utilizarán para definir prioridades de financiamiento para el esfuerzo de recuperación. Los planes finales incluirán una línea de base comunitaria, una evaluación de las necesidades, una estrategia de recuperación que incluya principios, una visión general, metas, un conjunto de proyectos de recuperación de alto valor y un cronograma estratégico de recuperación. La sección final describirá oportunidades para la integración del plan local con planes regionales y estatales. La sección incluirá también un inventario de recursos locales y estructuras gubernamentales, y describirá el nivel de aptitud técnica necesaria para implementar el plan. El énfasis del proceso de planificación se pondrá en elaborar planes basados en prácticas racionales y equilibradas de uso de la tierra que tomen en cuenta los peligros de reconstruir en áreas cuyo riesgo se vio incrementado debido a las nuevas pautas en materia de inundaciones.

2. *Construcción de una mejor Louisiana del Sur*

En los próximos años de reconstrucción, se construirán o reconstruirán cientos de miles de edificios en un período relativamente corto. Para recuperarnos por completo, queremos asegurarnos de que los habitantes de Louisiana construyan las mejores estructuras posibles: más seguras, más fuertes y más inteligentes. Urban Design Associates (UDA) desarrollará un conjunto global de herramientas e ideas para ayudar a los propietarios de viviendas y negocios en la reconstrucción. UDA fue la primera firma en promover el uso de Pattern Books® como vehículo para la comunicación de valores urbanos y arquitectónicos en la industria de la construcción. Estos Libros de patrones se distribuirán entre todos para ser usados en proyectos residenciales y comerciales, y contendrán secciones sobre diseño sostenible y técnicas de construcción “ecológicas o verdes”, así como también herramientas para la financiación de proyectos de viviendas para personas con distintos niveles de ingresos.

3. *Desarrollo de mejores vecindarios*

Para ayudar a las comunidades locales a reconstruir y mejorar sus vecindarios, Duany Plater-Zyberk & Company (DPZ) organizará una serie de talleres barriales denominados “charrettes”. Este proceso contará con la participación de tres jurisdicciones locales en el desarrollo de planes de ejemplo de recuperación y reurbanización. Fundada en 1980, DPZ ha diseñado más de 300 comunidades nuevas y existentes.

Se alentará a los residentes a ayudar a diseñar planes detallados personalizados para sus vecindarios con el énfasis puesto en reconstruirlos mucho mejores de lo que eran. De este modo, se convertirán en bloques integrantes de una visión regional demostrando de qué forma ciertas ideas de gran magnitud pueden implementarse en el nivel local, de a un vecindario por vez.

4. *La visión regional de Louisiana del Sur*

Calthorpe Associates desarrollará una visión regional con la ayuda de los mejores hombres de ciencia y planificadores de Louisiana y del país. Calthorpe Associates ha liderado una gran cantidad de esfuerzos de planificación regionales en los Estados Unidos y el extranjero. Su innovador proceso regional ha establecido nuevos estándares para la planificación global y de gran escala con todos los detalles.

El plan regional evaluará las fuerzas económicas, ambientales y sociales que conforman el territorio de Louisiana del Sur y explorará maneras alternativas para integrar el crecimiento y el desarrollo en el contexto de patrones ambientales, económicos y culturales diversos.

Resultados del Día de la planificación de la recuperación de Louisiana

El Día de la planificación de la recuperación de Louisiana, descrito anteriormente en la sección de planificación en el nivel de parish, permitió a los asistentes a los seminarios abiertos definir prioridades en los principios de planificación, tomar decisiones difíciles para la reconstrucción e identificar cuáles eran los puntos que consideraban más valiosos en sus comunidades. Los participantes evaluaron temas relativos al desarrollo habitacional y de la comunidad, temas del medio ambiente y de la línea costera, de desarrollo económico, servicios humanos, transporte e infraestructura. Expusieron sus ideas a través de conversaciones personales con miembros del equipo de Louisiana Speaks, quienes alentaron a los participantes a exponer sus ideas por escrito para que otros pudieran conocerlas y responder.

El informe del Día de la planificación resume respuestas de los 37 seminarios abiertos realizados tanto dentro como fuera del estado de Louisiana. Funcionarios estatales y locales junto con planificadores de los distintos parish utilizaron estos datos inmediatamente después de las reuniones para identificar proyectos de recuperación y planes tentativos que dispararán la recuperación de Louisiana. Como bloques de construcción para desarrollar la visión regional de Louisiana, estos planes servirán para contribuir a definir las propiedades de financiamiento de la recuperación durante los próximos años.

Los datos aportados por el público demostraron que los residentes de Louisiana concuerdan en varias cosas, entre ellas, la necesidad de seguridad. Por ejemplo, participantes de todos los rincones de los Estados Unidos dejaron en claro, por un margen de dos a uno, que una prioridad principal era reconstruir diques y represas. La restauración de las áreas costeras, que pueden contribuir a amortiguar los efectos de los huracanes a medida que avanzan tierra adentro, también fue otra de las tres primeras prioridades en todo el estado. De las quince preguntas que contenía la encuesta, las tres primeras representan el 40 % del total de respuestas.

PREGUNTA: ¿Si usted estuviera a cargo de la reconstrucción y sólo pudiera abocarse a tres (3) prioridades principales, cuáles serían?

#1: Construir mejores diques y represas y otro tipo de protección contra huracanes.

#2: Fomentar el desarrollo de nuevas viviendas.

#3: Restaurar las áreas costeras.

Se le preguntó a los participantes qué tan seguras debían ser, a su juicio, sus comunidades para que evaluaran la posibilidad de regresar, reconstruir o reinvertir en ellas. La abrumadora mayoría de los residentes de Louisiana del Sur buscaban seguridad para sí mismos, sus familias, sus hogares y sus comunidades. También dieron importancia a la seguridad de sus inversiones para prevenir pérdidas en tormentas futuras.

PREGUNTA: ¿Cuándo volverán?

63 %: Cuando sea más seguro que antes.

16 %: Cuando se logre el mismo nivel de seguridad de antes.

21 %: Están listos par regresar ahora mismo.

La necesidad de medidas de seguridad y protección será un componente obligatorio de cualquier inversión o gasto. El énfasis puesto en la seguridad, en todos los niveles, es un claro indicador de que el público espera que las inversiones realizadas como consecuencia de los huracanes Rita y Katrina se usen con la finalidad de reducir o eliminar el riesgo de daños provocados por desastres naturales en el futuro.

Los participantes de la jornada de planificación concordaron en que tanto las inversiones públicas como las privadas se deberían proteger contra pérdidas futuras, que ciertas zonas son demasiado peligrosas para reconstruir y que las áreas de mayor riesgo no deberían ser las primeras en reconstruirse. Los participantes también expresaron su deseo de ejercer cierto control (a través de planes de zonificación y de uso de tierras) sobre el proceso de reconstrucción. Esto demuestra una comprensión generalizada de que reconstruir de una manera distinta a como estaba puede contribuir a lograr las metas de reducir riesgos futuros y garantizar la seguridad.

La mayoría de los participantes concordaron en que estaban dispuestos a modificar los planes de su parish a fin de supeditarlos a temas regionales más amplios. Evaluar la relación entre los planes de parish y tomar un enfoque más regional, si corresponde, proporcionará mayor estabilidad y aumentará la flexibilidad de las comunidades.

Las respuestas de los participantes estuvieron equitativamente divididas en el tema de si se debiera garantizar el derecho de las personas a regresar al lugar de sus hogares originales. Fue notable el porcentaje de personas dispuestas a que NO se garantizara el derecho de reconstruir sus casas en los lugares en que se encontraban antes, dado el alto grado de compromiso de los residentes de Louisiana con los derechos de propiedad. Esto puede indicar cierto grado de aceptación a la reubicación o la consolidación como parte de la recuperación en ciertas áreas. Se deberán intensificar los esfuerzos para lograr un consenso más amplio en este tema.

Los participantes del Día de planificación también demostraron tener opiniones divididas respecto de si se deberían sacrificar otras necesidades de los parish (tales como vivienda y transporte) con el propósito de mejorar o construir nuevos diques y represas en caso de que los fondos no alcanzaran para cubrir ambos. No obstante, las respuestas indican que ellos no piensan que ésta sea una concesión aceptable y que debieran hacerse las dos cosas.

TEMAS CON MAYOR CONSENSO:

El 98 % dijo que se debería reconstruir la zona, pero de modo diferente para tomar en cuenta temas de pobreza, riesgo de huracanes, de inundaciones y de protección ambiental.

El 96 % indicó que estaban dispuestos a modificar los planes de sus respectivos parish en aras de fortalecer la región.

El 85 % concordó en que se debería recurrir a planes de utilización de la tierra como guía para la reconstrucción.

El 75 % coincidió en que se debe reconstruir y reinvertir primero en áreas de bajo riesgo.

El 74 % coincidió en que en ciertos lugares es muy peligroso reconstruir.

PUNTOS CON OPINIONES DIVIDAS:

El 51 % considera que las comunidades deben garantizar los derechos de un propietario de regresar al emplazamiento original de su vivienda, hecho con el que 49 % no estuvo de acuerdo.

Liderazgo de asesoramiento en la planificación y en políticas a nivel estatal

Además de la Planificación comunitaria de largo plazo, el estado, a través de la LRA, está liderando una planificación de largo plazo para consideraciones de política a través de Grupos de tareas del consejo directivo de la LRA. Estos grupos de trabajo están compuestos por miembros del consejo directivo y expertos en las distintas materias que proporcionan recomendaciones y ofrecen supervisión para el consejo directivo de la LRA sobre temas referidos a políticas en diversos temas, entre ellos, Vivienda y reurbanización permanentes; Desarrollo económico y de la fuerza de trabajo, Salud pública y atención a la salud, Servicios humanos, Planificación comunitaria de largo plazo, Medio ambiente, Infraestructura y transporte y comités del Directorio para Auditoría y para Protección de las áreas costeras. Estos grupos de trabajo desarrollarán planes estratégicos para asuntos de políticas de recuperación que servirán para asignar prioridades al proceso de toma de decisiones en materia de esfuerzos de recuperación. También deberán desarrollar y recomendar programas de recuperación o iniciativas de política específicas, ya sea con el financiamiento del CDBG o de otras fuentes federales o estatales, o iniciativas para someter a consideración de agencias o de la legislatura estatales. Entre estas recomendaciones podemos mencionar, a modo de ejemplo, el programa de préstamo puente para empresas, viviendas estatales para reemplazar las deterioradas y propiedades adjudicadas y reducciones impositivas a consumidores y negocios por necesidades de recuperación.

Promoción estatal a las construcciones de calidad

El estado aprobó la Ley 12 en una sesión legislativa especial que tuvo lugar en diciembre de 2005. Antes de la aprobación de esta ley, Louisiana jamás había contado con un código de edificación vigente en todo el estado. Esta ley establece un estándar mínimo en todo el estado que responde al Código Internacional de Construcción (IBC, por sus siglas en inglés) para garantizar que viviendas y negocios se reconstruyan de modo que puedan resistir el próximo huracán. A través de programas que se están diseñando en este momento, como el programa de reparación de viviendas, el estado obligará a las jurisdicciones, en especial a aquellas costeras, a establecer elevado estándares de construcción. Los códigos de edificación más estrictos también contribuirán a que los propietarios de viviendas y negocios obtengan el seguro que necesitan para reconstruir. La ley también exige que los siguientes parish exijan, como medida de emergencia, que se cumplan todos los requisitos de mitigación de inundaciones descritos en la

Ley 12: Calcasieu, Cameron, Iberia, Jefferson Davis, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Bernard, St. Tammany, Terrebonne y Vermilion.

El estado indicará cuáles son los métodos de construcción preferidos con énfasis puesto en el ahorro de energía y la resistencia al moho en un plan de acción venidero que contendrá el plan de vivienda del estado. Las RS 51:911.22 y RS 51:911.21 de los Estatutos revisados de Louisiana contienen los estándares para la fabricación e instalación de casas prefabricadas. Louisiana ha adoptado los estándares del HUD, según la enmienda a la ley National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act (Ley de normas de construcción y de seguridad para viviendas prefabricadas) de 1974.

Los programas incluidos en este plan de acción propuesto exigen construcciones seguras y de calidad. Por ejemplo, el programa de equiparación para infraestructuras de emergencia del gobierno local sólo estará disponibles para aquellos parish que hayan adoptado las elevaciones de inundación básicas más recientes de la Flood Recovery Guidance (Guía de recuperación en caso de inundación) de FEMA y para aquellos que hayan adoptado, implementado o estén haciéndolo, los nuevos estándares de código de construcción que rige para todo el estado adoptado en la Ley 12 de la Sesión Especial de la Legislatura de Louisiana. Así como se propone usar el subsidio CDBG en este plan para pagos equiparados del gobierno local en los proyectos de asistencia pública de FEMA, existirá una forma similar de recibir igual cantidad de dólares para los gobiernos locales que propongan esfuerzos de mitigación. Las comunidades más damnificadas del estado cuentan con pocos recursos para igualar estos pagos, por tal motivo, programas tales como el CDBG desempeñarán un papel preponderante en asegurar tareas de mitigación exitosas por parte de estas comunidades durante el período posterior al desastre, en que el presupuesto se encuentra tan restringido.

En respuesta a los huracanes Katrina y Rita, la LRA ha asumido el papel de Equipo de mitigación de peligros del estado y, por lo tanto, es responsable de determinar las prioridades generales para el uso de los fondos del Hazard Mitigation Grant Program (HMGP- Programa de Subsidio de Mitigación de Peligros) y de recomendar proyectos para financiar.

Todos los parish del estado de Louisiana pueden solicitar asistencia bajo el programa HMPG y se le otorgará prioridad a las áreas más dañadas. En este momento, se estima que los fondos del HMGP crecerán hasta alcanzar las inmediaciones de los 2 mil millones de dólares. Para tener acceso a estos fondos de mitigación de peligros, los parish deberán presentar propuestas a OHSEP a través de sus oficinas de Administración de emergencias locales. Los fondos, que se proporcionan bajo la ley Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act exigen una equiparación del 25 por ciento por parte de los gobiernos de los parish o de las agencias estatales. La distribución de estos fondos está sujeta a un proceso de revisión formal del Inspector General, El Auditor Legislativo, el

Comisionado de Administración y el Tesorero del estado, tal como se ha hecho con todos los fondos distribuidos por OSHEP desde el huracán Katrina.

La primera medida de la LRA relacionada con la mitigación de peligros consistió en iniciar de inmediato proyectos de mitigación en el estado autorizando la suma de \$ 256 millones en financiamiento para cuatro finalidades: 1) Mitigar los daños en propiedades que se inundan repetidamente (propiedades dañadas cuatro veces o más o dos veces por un valor que supera la mitad de la misma), 2) elevación o adquisición de otras residencias, 3) reacondicionamiento y modernización de instalaciones críticas, y 4) planificación de mitigación. La primera acción responde al hecho de que Louisiana cuenta con una de las mayores cantidades de propiedades que se inundan repetidamente en todo el país, incluso antes de los huracanes de 2005. Al tomar esta medida, el consejo directivo consideró prioritario resolver el problema de las propiedades de alto riesgo en el estado. Se espera que el segundo aspecto de esta asignación inicial financie los proyectos de inundación y de mitigación de desastres de mayor prioridad.

La segunda medida del consejo directivo de la LRA consistió en aprobar la siguiente como lista jerárquica de prioridades en materia de mitigación; de conformidad con el Plan de Mitigación de Peligros del estado aprobado, a modo de lista de prioridades para una estrategia de instrumentación a largo plazo.

- Adquisición y demolición
- Elevación
- Demolición/Reconstrucción
- Reacondicionamiento de instalaciones críticas
- Reacondicionamiento de instalaciones públicas
- Reacondicionamiento de instalaciones sin fines de lucro
- Reacondicionamiento de estructuras residenciales
- Proyectos de desagües y alcantarillados
- Reacondicionamiento de negocios
- Restauración de las áreas costeras
- Planificación
- 5% Apartado

Sobre la base de estas acciones, \$ 100 millones de la asignación inicial se destinará a elevar y adquirir viviendas severa y repetidamente dañadas; otros \$ 136 millones se usarán para proyectos de mitigación en parish declarados como zonas de desastre por la FEMA, y los restantes \$ 14 millones se destinarán a planificación para mitigación de desastres por parte de organismos del estado, locales, tribales y ciertas organizaciones privadas sin fines de lucro que reúnan los requisitos.

Además de abordar las prioridades, tal como se aprecia de lo anteriormente expuesto, la LRA también recomienda que se consideren y otorguen mayor prioridad a proyectos que proporcionen una solución regional o sistémica a

peligros naturales. Cada aplicación se evaluará también para determinar si el proyecto produce impactos coherentes con la política y los lineamientos de la LRA y del estado y con los estándares desarrollados para guiar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de los efectos de Katrina y Rita.

El equipo de mitigación de peligros del estado ha aprobado una resolución en respaldo del principio de que los fondos de HMGP se deberían apalancar, en la medida de lo posible, con otros fondos federales, estatales y locales, como por ejemplo, los fondos CDBG, a fin de usar todos los recursos posibles de forma coordinada y poder así prepararse de la mejor manera posible para enfrentar posibles daños por inundación u otro tipo de desastre o incluso impedirlos. Así como se propone usar el subsidio CDBG en este Plan de Acción para pagos equiparados del gobierno local en los proyectos de asistencia pública de FEMA, existirá una forma similar de recibir igual cantidad de dólares para los gobiernos locales que propongan esfuerzos de mitigación. Las comunidades más damnificadas del estado cuentan con pocos recursos para igualar estos pagos, por tal motivo, programas tales como el CDBG desempeñarán un papel preponderante en asegurar tareas de mitigación exitosas por parte de estas comunidades durante el período posterior al desastre, en que el presupuesto se encuentra tan restringido.

Albergues de emergencia/viviendas de transición

Tanto los responsables de crear políticas como las personas preocupadas por los desamparados se esfuerzan por comprender los cambios sufridos por la población sin hogar de Louisiana. Tomará meses, si no años, documentar cabalmente las consecuencias sufridas por las personas sin hogar en toda su dimensión. A pesar de ello, existen ciertas observaciones indiscutibles, entre ellas, las siguientes:

- * El abuso de drogas y las enfermedades mentales crónicas son los dos factores más significativos que llevan a la condición de estar privado de hogar. El estrés postraumático relacionado con una evacuación generalizada no sólo incrementa la población de personas sin hogar; algunas personas discapacitadas que tienen donde vivir experimentarán un detrimento en su condición que puede hacerlos regresar a la condición de no tener hogar.
- * Debido al aumento del desempleo o del empleo precario (que son factores adicionales importantes de la pérdida del hogar) como consecuencia de los huracanes Katrina y Rita, y al esfuerzo financiero impuesto por la reubicación o la búsqueda de un nuevo hogar, las familias que poseían una vivienda, aunque precaria, pasarán a engrosar las filas de los que carecen de ella.
- * La grave escasez de viviendas económicas se ha agudizado significativamente como consecuencia de los huracanes. La

disponibilidad de viviendas económicas fue destruida en el Sur de Louisiana. Las comunidades de otras regiones del estado que se han esforzado por encontrar viviendas económicas para sus integrantes han advertido que la competencia por estas unidades ha provocado el alza de los alquileres y, como consecuencia, muchas personas y familias pasaron a la condición de personas sin hogar.

Nuestro sistema y recursos ya estaban casi al límite de su capacidad antes de que se produjeran los huracanes Katrina y Rita. El aumento de la demanda en el sistema con posterioridad a estas catástrofes hizo aún mayor el desafío de reducir sustancialmente o erradicar la condición de las personas sin hogar. Para ello, la solución más eficaz consiste en ofrecer viviendas económicas con recursos de apoyo que las hagan sostenibles. Debe haber un aumento en la oferta de viviendas económicas y en el financiamiento de servicios de asistencia para que la reubicación de personas y familias sea exitosa.

Son cuantiosos los desafíos que debemos enfrentar para dar respuesta a las necesidades de vivienda de emergencia y de transición para personas y familias. El hecho de revelar y documentar las necesidades en toda su magnitud, no nos impide emprender la difícil tarea de aumentar la provisión de viviendas económicas y el financiamiento de servicios de asistencia para que la reubicación de personas y familias sea exitosa.

Prevención

Una de las prioridades más urgentes del estado de Louisiana es su compromiso de evitar que familias con niños y personas de bajos recursos (en especial, aquellos cuyos ingresos están un 30 por ciento por debajo de la media) queden desamparados. Para evitar esta situación, las principales entidades de gobierno deben prestar asistencia a la población más vulnerable, aquellos con discapacidades graves o en estado de extrema pobreza, para que obtengan una vivienda y la puedan conservar. El hecho de invertir en la prevención significa seguramente un ahorro en costosos sistemas con mucha demanda por parte de las personas sin hogar: hospitales y cárceles. Los programas de prevención efectiva de la carencia de hogar incluyen: (1) programas de asistencia para el pago de alquileres dirigidos a familias en estado de extrema pobreza o con amenaza de desalojo o de ejecución hipotecaria, y (2) políticas de planificación del alta de instituciones públicas, como por ejemplo, centros de salud mental o de rehabilitación por abusos de drogas, institutos correccionales, hospitales, servicios de acogida de niños sin adoptarlos y correccionales de menores.

Al 15 de agosto de 2005, dos semanas antes del huracán Katrina, la cantidad de grupos familiares que alquilaban su vivienda ascendía a 93,783. Para el dieciocho por ciento del total de esos grupos familiares, el costo del alquiler

representaba más del 30 por ciento de sus ingresos. Estas cifras los colocan en una situación de riesgo de desamparo. Estos valores se han duplicado debido a la pérdida de viviendas económicas como consecuencia de la devastación provocada por los huracanes Katrina y Rita, y el alza grave de los alquileres de las viviendas habitables disponibles.

Nos hemos propuesto elaborar o mejorar la capacidad de los programas de asistencia para alquileres que ofrezcan subsidios de corto plazo para costear los gastos de alquiler y los servicios públicos de las familias con aviso de desalojo o de corte de servicios públicos. El programa estará dirigido a aquellas familias con niños en condición de extrema pobreza para evitar el desalojo o la ejecución hipotecaria de un hogar. Se elaborarán programas y actividades innovadoras para reducir la incidencia de la carencia de hogar. Otro grupo que necesita asistencia para el pago de alquileres lo conforman aquéllos con dificultades financieras provocadas por la pérdida del trabajo, enfermedad o discapacidad, emergencia familiar o aquellos que no puedan pagar el alquiler por el aumento sustancial ocasionado por las secuelas de los huracanes. Otros programas incluyen depósitos de garantía o el pago del primer mes de alquiler a fin de que las familias sin hogar puedan mudarse a una vivienda; programas de mediación para controversias entre inquilinos y propietarios, y programas de servicios legales para el patrocinio de arrendatarios indigentes en juicios de desalojo.

La identificación precoz de las personas en riesgo de quedar sin techo es un aspecto fundamental de la prevención de la condición de persona sin hogar. Para facilitar dicha identificación, Louisiana diseñará un perfil/lista de comprobación de personas sin hogar que permita alertar a los organismos sobre los casos en que es imperioso acelerar la intervención. El estado reconoce la necesidad de que los organismos que de él dependen y otros prestadores de servicios cuenten con información sobre los recursos de vivienda disponibles, que incluyen aquellos para grupos con necesidades especiales, como por ejemplo, los discapacitados. Louisiana tiene previsto elaborar una base de datos fidedigna de viviendas económicas para cada región del estado.

De la vivienda de transición a la definitiva

El estado de Louisiana reconoce la importancia de ayudar a las personas sin hogar para que pasen de la vivienda de transición a una definitiva y puedan llevar una vida independiente. Este enfoque de asistencia continua conlleva una vasta planificación estratégica en el ámbito de la comunidad para inventariar los recursos existentes e identificar las carencias o deficiencias y lograr una atención continua extensiva también a las personas sin hogar de condición crónica. Las actividades destinadas a eliminar tales carencias constituirían los objetivos principales a los que serán asignados los recursos disponibles para atender a las necesidades de vivienda y de las personas sin hogar.

Las personas y familias sin hogar suelen necesitar variados y numerosos servicios de asistencia para alcanzar una vida independiente, entre ellos, educación correctiva, búsqueda y capacitación laboral, servicios de rehabilitación por abuso de drogas o alcoholismo, gestión de casos y servicios de cuidado diurno. El alcance o las posibilidades de acceso a los programas de asistencia para personas sin hogar pueden ser limitados o bien, estos programas pueden no dar respuesta a necesidades especiales. En todo el estado, se advierte la imperiosa necesidad de crear y ampliar los servicios de asistencia para quienes viven en albergues.

Para erradicar la condición de persona sin hogar, el ingreso de la población debe ser suficiente para conseguir y conservar la vivienda. Muchos pueden tomar trabajos de medio tiempo o que demanden menor esfuerzo. Conseguir trabajo para aquellos que están en condiciones de trabajar supone, a veces, una tarea desafiante. Muchas personas no tienen experiencia ni habilidad alguna, mientras que otros ni siquiera saben leer ni escribir. Algunos, si bien cuentan con suficiente preparación, han estado en prisión, hecho por el cual los empleadores se rehúsan a contratarlos. Con mayor apoyo financiero, el estado, con la mediación de asociaciones de ayuda a personas sin hogar y de organismos del estado, continuará ofreciendo las oportunidades y el apoyo necesarios para que estas personas consigan y conserven un trabajo; ofrecerá oportunidades de educación para fomentar ciertas habilidades personales, reducirá los obstáculos que impiden a los desamparados obtener y conservar un empleo, así como también se ocupará de las políticas públicas que influyen sobre la capacidad de las personas sin hogar para hacer frente a los costos de vivienda.

Las prioridades para la creación de viviendas para una sola persona y de transición o permanentes, y la elaboración de programas complementarios de asistencia a las personas sin hogar son primordiales para las principales regiones urbanas del estado. Sin embargo, las zonas no urbanas también carecen de estos recursos y podrían beneficiarse con los programas que abarcan zonas de uno o varios parish e incluyen componentes y elementos de servicios de asistencia con amplia participación de la comunidad para el desarrollo de sistemas de atención continua.

La vivienda asistida ha demostrado ser la solución, con un éxito abrumador, a la condición de persona sin hogar porque es una alternativa económica y fácil de implementar en la comunidad, en comparación con los albergues, que permite a sus beneficiarios obtener una vivienda y lograr mayor nivel de autosuficiencia. La vivienda asistida, por definición, es una vivienda permanente de alquiler accesible con ciertos servicios (vinculados con la salud en general, la salud mental y el empleo) necesarios para que las personas recompongan sus vidas tras haber permanecido en una institución, sin hogar u otras situaciones límite. Se han combinado exitosamente en viviendas para personas con ingresos de diversos niveles, emprendimientos de uso diverso y viviendas asistidas que representan entre el 50 y el 60 por ciento de las unidades en alquiler de un

edificio mientras que los demás apartamentos son ocupados por trabajadores con bajos ingresos. En general, el personal que trabaja en el edificio se ocupa de que los inquilinos obtengan la asistencia y el apoyo necesarios en cuestiones de salud y empleo, y que sigan el proceso que los llevará a conservar los beneficios y conseguir trabajo.

Según estudios nacionales, la vivienda asistida ha resultado ser por lejos menos onerosa que el alojamiento en albergues, internaciones en hospitales y otras modalidades de atención de emergencia a las personas sin hogar. Especialmente, cuando se trata de personas muy enfermas que recurren con frecuencia a hospitales y servicios de salud mental, la vivienda asistida produce importantes reducciones del gasto público en la atención de emergencia e instituciones especializadas.

Las viviendas asistidas no sólo han sido desarrolladas por grupos sin fines de lucro sino también ocasionalmente por constructores comerciales en la modalidad llave en mano en representación de organizaciones sin fines de lucro propietarias. Los servicios de asistencia son prestados o coordinados por grupos sin fines de lucro, en algunos casos, en asociación con otros grupos sin fines de lucro. Las propiedades suelen ser administradas por los mismos grupos o, con menos frecuencia, por compañías comerciales contratadas por las organizaciones sin fines de lucro propietarias.

La vivienda asistida ha recurrido típicamente al Low Income Tax Credit (Crédito impositivo por bajos ingresos) como un medio importante de financiación. Siempre que fue posible, el Historic Rehabilitation Tax Credit (Crédito impositivo para rehabilitación de edificios históricos) se ha empleado para garantizar la inversión privada de capital. En muchas ciudades, los fondos HOME y HOPWA federales han aportado capital para estos proyectos. (En Louisiana, el compromiso de aporte de capital y compromisos de operación para un plan de desarrollo de 10,000 unidades de vivienda asistida constituye el primer paso.) La obtención de sitios y edificios para su conversión en viviendas asistidas o de terrenos para la construcción de tales viviendas es otra tarea urgente. Las tareas de identificación y formación de operadores locales sin fines de lucro para construir y coordinar viviendas asistidas se pueden realizar simultáneamente.

Los fondos de CDBG se destinarán a complementar y mejorar la financiación a las personas sin hogar aportada por el HUD con recursos del programa McKinney (adjudicaciones de financiamiento de la fórmula ESGP y de asistencia continua SuperNOFA). Se presentará una propuesta a la LRA para solicitar financiación bajo la categoría Programa de vivienda. Estos fondos se destinarán a financiar la obtención de sitios y servicios y a la ampliación de las instalaciones con el objeto de eliminar o reducir las carencias de necesidades no atendidas en la prestación local de servicios y en los sistemas de vivienda para las personas sin hogar.

Personas con necesidades especiales

La solución más eficaz ofrecida por el estado para atender las necesidades especiales de personas que sí tienen hogar es ofrecerles una vivienda accesible con recursos de apoyo que la hagan sostenible. Es decir, evitar que lleguen a la condición de persona sin hogar siempre que sea posible, ofrecer una nueva vivienda en caso de que no se pueda evitar dicha condición y prestar servicios supletorios que permitan a la persona en cuestión conservar la vivienda y ser autosuficiente. Esta tarea se volvió más difícil después de Katrina.

Se cree que las siguientes poblaciones se encuentran en riesgo de convertirse en personas sin hogar:

- *La población de muy bajos ingresos que incluye a los beneficiarios del subsidio Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- * Ancianos
- *Personas de bajos ingresos con problemas de adicción a las drogas
- *Ex convictos puestos en libertad recientemente
- *Personas discapacitadas mentalmente dadas de alta de instituciones de salud mental
- *Víctimas de violencia familiar

El acceso a una vivienda digna es un problema que afecta a muchas personas con necesidades especiales, entre ellos, las personas crónicamente sin hogar. El costo de la atención médica y de los medicamentos, la falta de transporte, el alza de los alquileres, la discriminación vinculada con la vivienda y la escasez de viviendas económicas son los mayores inconvenientes que estas personas deben enfrentar, en especial después de los huracanes Katrina y Rita. La falta de una vivienda estable y accesible puede provocar un incremento en las inasistencias a citas médicas y el acceso esporádico a la atención pueden reducir el impacto de los medicamentos y del tratamiento médico. Todo ello, a su vez, puede generar mayores necesidades. Algunos grupos con necesidades especiales presentan una mayor incidencia de ciertas enfermedades, entre ellas el HIV, que la población en general. La condición de persona sin hogar suele coincidir con alguna enfermedad mental crónica, con la adicción a las drogas y con un comportamiento sexual no seguro; todos estos factores contribuyen a elevar el riesgo de necesidades especiales.

La estrategia del estado para las personas en riesgo toma en cuenta el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de beneficencia comunitarias y los programas de voluntarios, de forma independiente o con la colaboración de entidades locales públicas y de gobierno, para establecer y mantener las instalaciones y servicios destinados a personas con necesidades especiales. Los siguientes elementos son fundamentales para esta estrategia:

1. La obtención de información sobre la población en riesgo en el estado y la evaluación de las necesidades de estas personas;
2. La difusión y divulgación de esta información en los grupos y entidades comunitarios abocados en la atención de personas en riesgo;
3. La evaluación de las necesidades especiales de las personas (componente del sistema de atención continua);
4. Realizar las remisiones correspondientes a los recursos comunitarios disponibles;
5. La provisión y coordinación de todos los servicios necesarios de modo que las personas sin hogar reciban el máximo de beneficios de las instalaciones y servicios disponibles, y
6. Promover la creación de todos los servicios, las redes de servicios y los recursos públicos y privados necesarios y apropiados (que incluyen aportes de bienes raíces, de dinero, etc.) para respaldar las actividades de asistencia a las personas con necesidades especiales de Louisiana.

Monitoreo de las actividades

El Department of Social Services/Office of Community Services (Departamento de servicios sociales/Oficina de servicios comunitarios) creará, bajo la supervisión del Comité de auditoría del consejo directivo de la LRA, los procedimientos necesarios y completos para monitorear el cumplimiento de las reglas del programa por parte de los gobiernos locales y los grupos sin fines de lucro beneficiarios de conformidad con el Community Development Block Grant Program en caso de que se asignen fondos para estos fines. Como parte del proceso de revisión de la solicitud inicial, ciertos componentes de las propuestas de proyecto serán evaluados en relación con su cumplimiento con las reglas del programa. Esta evaluación influirá en la selección de propuestas de proyectos para ser financiados y el volumen de fondos otorgados a cada proyecto. Según sea necesario y apropiado para la negociación y la redacción de acuerdos de subsidios por parte del estado, los gobiernos locales o los patrocinadores de proyectos serán instruidos para revisar las propuestas y los presupuestos a fin de descartar actividades que no reúnan las condiciones y para alinear las actividades propuestas con las reglamentaciones de HUD con mayor rigor. Según lo estipulan las normas del programa, el estado acatará las reglamentaciones del HUD en relación con el control del cumplimiento de las disposiciones y las autoridades ambientales.

Los procedimientos fiscales del estado exigen que las solicitudes de pagos que se presenten mediante formularios suministrados por el DSS, identifiquen claramente los costos por categoría con derecho y describan el origen y el monto de los fondos aportados correspondientes. El proceso de revisión de presupuestos exige que los beneficiarios presenten las revisiones solicitadas por escrito para su aprobación por el estado, en caso de que la revisión conlleve nuevas partidas o la transferencia de fondos entre categorías de CDBG. Las

disposiciones contractuales estándar exigen que los gobiernos locales beneficiarios presenten copias de sus informes de auditoría al DSS. El personal de revisión de auditoría del DSS revisa los informes de auditoría presentados por los gobiernos locales respecto de cuestiones relacionadas con los programas administrados por el DSS y se pone en marcha un seguimiento de las medidas que se deben tomar para resolver las cuestiones detectadas por la auditoría.

La supervisión in situ de los gobiernos locales debe estar a cargo de la Contracts and Eligibility Section (Sección de contratos y requisitos) de la Office of Community Services (Oficina de servicios comunitarios) de conformidad con las reglamentaciones del subsidio CDGB. Las cuestiones de supervisión incluyen todas las disposiciones de reglamentación y estatutarias pertinentes que correspondan al subsidio CDBG según lo establece el Code of Federal Regulations (CFR – Código federal de reglamentaciones). A continuación se detallan las principales áreas de cumplimiento del programa que deben ser cubiertas durante las evaluaciones de supervisión in situ: calidad del cliente con respecto a los requisitos que debe reunir, cumplimiento del principio de separación iglesia/estado, cumplimiento con el principio de lugar de trabajo libre de drogas, cuestiones de confidencialidad, participación en un proyecto de personas sin hogar, proceso formal de terminación de la asistencia, mantenimiento de registros y creación de informes de desempeño. Los informes sobre dicha supervisión se compartirán con el comité de auditoría del Consejo directivo de la LRA:

Programas CDBG

Como se ha dicho en la sección de respuesta federal y estatal, se ha generado una importante actividad de reconstrucción en respuesta a las necesidades descritas en este plan. El objetivo principal de la inversión de fondos CDBG complementarios consiste en neutralizar las carencias de financiación de las necesidades más críticas en las áreas de vivienda, infraestructura y desarrollo económico. Otro objetivo primordial consiste en apalancar otros recursos de los sectores público y privado disponibles para los esfuerzos de recuperación.

Programas de infraestructura

El estado ha sufrido importantes pérdidas en infraestructura. Como ya se dijo, existen grandes carencias que se deben resolver para recuperar la infraestructura básica en los niveles local y del estado a fin de estar en condiciones de prestar los servicios públicos necesarios. Para poder dar respuesta a las necesidades insatisfechas identificadas, se prevé asignar \$1,187,500,000 a actividades de infraestructura en los niveles local y del estado.

Infraestructura de emergencia de gobiernos locales

Actividad con derecho	105(a)(2) y (9) Instalaciones públicas
Objetivo nacional	Ingreso bajo a moderado, eliminación del deterioro, necesidad urgente
Monto de la actividad	\$95 millones

De los \$1,187,500,000, se prevé asignar inicialmente \$95,000,000 al Local Government Emergency Infrastructure Program (Programa de emergencia de infraestructura del gobierno local). Este programa suministrará a los gobiernos locales el aporte de FEMA para los proyectos de emergencia de infraestructura correspondientes. El método de distribución se registrará por el principio primero en llegar, primero en ser atendido. En la medida en que los proyectos de asistencia sean aprobados por la FEMA, el estado aportará los fondos necesarios para equiparar la inversión local en estos proyectos si se reúnen los siguientes requisitos:

1. Los fondos que se aportarán serán destinados a casos de necesidad de emergencia (que serán determinados por el estado).
2. Los fondos que se aportarán serán asignados a proyectos que reúnan las condiciones para la Asistencia pública de FEMA;
3. Los fondos se aportarán a los parish que hayan adoptado las elevaciones de inundación básica disponibles más recientes del FEMA Flood Recovery Guidance (Guía de recuperación en caso de inundación de FEMA);
4. Los fondos se aportarán a los parish o comunidades que hayan adoptado, implementado o estén en proceso de implementar los nuevos estándares del código de construcción vigentes en todo el estado adoptado en las Primera sesión extraordinaria de 2005 de la Legislatura de Louisiana;
5. Los fondos se aportarán a las comunidades para la financiación de proyectos recomendados mediante un amplio proceso de planificación para toda la comunidad, y
6. Los proyectos que reciban fondos tengan el mejor esquema de prestación de servicios en función de los desplazamientos de la población y los cambios sufridos por las comunidades de Louisiana.

Todo proyecto financiado cumplirá uno de los tres objetivos nacionales. No se podrá determinar el objetivo nacional específico hasta tanto no se reciban las solicitudes y se conozcan las áreas de servicio y los beneficiarios.

Esta actividad se considera de bajo riesgo. La supervisión se realizará de acuerdo con el plan de supervisión adjunto. (Apéndice 6)

Programa de infraestructura de edificios del estado

Actividad con derecho	105(a)(2) y (9) Instalaciones públicas
Objetivo nacional	Ingreso bajo a moderado, eliminación del deterioro, necesidad urgente
Monto de la actividad	\$142,500,000

Alrededor de 1,500 edificios del estado fueron dañados por los huracanes Katrina y Rita. Los daños estimados tanto en relación con los edificios como con su contenido ascienden a \$ 1.8 mil millones aproximadamente. El seguro cubrirá alrededor de \$ 300 millones de la dicha pérdida, quedando sin cobertura 1.5 mil millones. Los fondos aportados por FEMA según las disposiciones de la Ley Stafford y las declaraciones presidenciales cubrirán un 90 % de las pérdidas no aseguradas; es decir, que queda una deficiencia de \$ 150 millones en momentos en que la base impositiva del estado ha sufrido un gran impacto. \$ 142.5 millones de los fondos de CDBG se emplearán para equiparar el aporte de FEMA para tales instalaciones.

Es imposible reparar los 1,528 edificios dañados al mismo tiempo. No hay suficientes arquitectos ni contratistas para reparar los \$ 1.8 mil millones en concepto de daños de inmediato. Como consecuencia de ello, el estado ha elaborado un proceso para determinar las prioridades y la oportunidad en que se deben reparar los edificios del estado. Se confeccionó un árbol de decisiones para elaborar un plan de restauración de edificios del estado. Para iniciar este proceso fue necesario desarrollar primero una base de datos, o lista, de todos los edificios dañados y el costo estimado para repararlos. Éstas son estimaciones de costos iniciales, los costos reales de la reparación dependerán de las condiciones reinantes al momento de la licitación así como también de los daños ocultos, no previstos o no anticipados que se conocerán una vez iniciados los trabajos.

Una vez creada la lista de edificios dañados, se elaboró un sistema para establecer prioridades. El personal de Facility Planning and Control (FP&C – Control y planificación de edificios) de la DOA creó un árbol de decisión que fue aprobado por el Joint Legislative Committee on the Budget (Comisión legislativa conjunta sobre el presupuesto). El árbol de decisión se basó en los conocimientos de FP&C sobre las instalaciones, agencias y programas alojados en los edificios dañados. A continuación se resume el proceso de toma de decisiones y la aplicación del árbol de decisión.

Lo primero que se tuvo en cuenta fue el grado de importancia de estos edificios o bien si constituían un símbolo para el estado o eran considerados parte del patrimonio cultural o histórico. Se entendió que la reparación de tales edificios podría comunicar al mundo y a nuestros compatriotas que Louisiana está de pie.

Ésta fue la primera pregunta en ser formulada y respondida. Los edificios que respondieron a estos criterios fueron los proyectos de prioridad 1.

El segundo tipo de edificio considerado fueron aquellos en los que se desarrollaban todas las funciones básicas y necesarias del gobierno del estado (funciones de mandato público: seguridad pública, servicios de protección de la salud, educación y encarcelamiento). Se formularon las siguientes preguntas: “¿Cuál es la actividad del gobierno?” “¿Por qué existe el gobierno?” A estos edificios les correspondió la prioridad 2 si no se inundaron y la prioridad 3, si se inundaron. Se consideró importante determinar si se deberían restaurar los edificios con riesgo de inundación antes que los que no corrían ese riesgo. A estos edificios, que no se encuentran en una zona con peligro de inundación, se los colocó en la categoría de prioridad 2 alta mientras que a los que tienen riesgo de inundación se los colocó en la categoría de prioridad 2 baja. Se preguntó si el edificio era sede de algún programa esencial del gobierno del estado. Si la respuesta era negativa, el edificio era colocado a la izquierda del árbol de decisión. Si la respuesta era positiva, se lo colocaba a la derecha con alta probabilidad de ser catalogado como de prioridad 2 o 3.

El siguiente nivel del árbol de decisión se basaba en la pregunta: “¿El edificio impulsa el desarrollo económico?” (Instalaciones que promueven la reubicación de industrias o promueven el turismo.) Si la respuesta era negativa, el edificio era colocado a la izquierda del árbol de decisión. Si la respuesta era positiva, el edificio quedaba a la derecha con posibilidades de ser catalogado como de prioridad 4 si no pertenecía a una Zona especial con riesgo de inundación y como de prioridad 5 si pertenecía a alguna de esas zonas.

El siguiente nivel de decisión estaba relacionado con instalaciones autoabastecidas con financiación propia. Se hizo la pregunta: “¿El edificio tiene significado histórico?” (Más de 45 años de antigüedad, sitio de un hecho histórico, estilo arquitectónico único o significativo o de naturaleza educativa.) Si la respuesta era negativa, el edificio era colocado a la izquierda del árbol de decisión. Si la respuesta era positiva, el edificio quedaba a la derecha con posibilidades de ser catalogado como de prioridad 8 si no pertenecía a una Zona especial con riesgo de inundación y como de prioridad 9 si pertenecía a alguna de esas zonas.

El siguiente nivel de decisión estaba relacionado con edificios de significado histórico. La pregunta era “¿El edificio genera ingresos que cubren por completo su mantenimiento?” (Se cobran aranceles o cuenta con otras formas de generar ingresos para financiarse.) Si la respuesta era negativa, el edificio era colocado a la izquierda del árbol de decisión. Si la respuesta era positiva, el edificio quedaba a la derecha con posibilidades de ser catalogado como de prioridad 6 si no pertenecía a una Zona especial con riesgo de inundación y como de prioridad 7 si pertenecía a alguna de esas zonas.

La primera etapa del proceso permitió asignar prioridades a todas las instalaciones en el nivel de programa. Era necesario asignar prioridades por edificio formulando las preguntas respecto de cada edificio en el nivel de sitio. Las siguientes preguntas fueron respondidas por nosotros y las agencias de usuario o los consejos directivos de las instituciones: "¿En el edificio se realizan funciones esenciales para la misión, programa o actividad de la institución?" Se trató a continuación la importancia de cada edificio en relación con la misión, programa o actividad de la entidad. En todos los grupos se discutió la posibilidad de consolidación o de ubicaciones alternativas de los programas y actividades en caso de que la restauración sufriera demoras. Esta información nos permitió refinar aún más la lista de prioridades.

La lista de prioridades se presentó por orden de prioridad ante el Joint Legislative Committee on the Budget (Comité legislativo conjunto de presupuesto) y fue posteriormente aprobada por dicho comité. Véase en el Apéndice 7 la lista de prioridades y en el Apéndice 8 una explicación del árbol de decisión.

Todo proyecto financiado cumplirá uno de los tres objetivos nacionales. No se podrá determinar el objetivo específico hasta tanto no se reciban las solicitudes y se conozcan las áreas de servicio y los beneficiarios.

El estado ha elaborado vastos procedimientos para asegurar el cumplimiento de las regulaciones de los programas CDBG del HUD para cada proyecto financiado. El estado verificará la calificación de los proyectos en la lista de prioridades predeterminadas y asegurará que los proyectos respondan a uno de los tres objetivos nacionales. El estado también garantizará que el proyecto reúne las condiciones para recibir los fondos de FEMA anteriormente descritos. El estado comprobará si los proyectos cuentan con el visto bueno de FEMA en cuestiones ambientales antes de iniciar el proceso de construcción.

El estado revisará el proceso de compra empleado para contratar un arquitecto o ingeniero en cada caso y comprobará y documentará si la persona o empresa contratada figura en la lista de exclusión federal. El estado asegurará también que el contrato de servicios profesionales incluya todas las cláusulas y condiciones complementarias obligatorias.

El estado revisará el paquete de licitación del proyecto y garantizará la inclusión de todas las cláusulas y condiciones complementarias obligatorias, las disposiciones de las normas federales de trabajo, las decisiones actuales sobre remuneraciones, etc. El estado asistirá a la conferencia previa a la licitación y a la apertura de pliegos según sea necesario. El estado obtendrá una copia de la tabulación de la licitación y comprobará y documentará si los contratistas seleccionados tienen derecho a participar mediante el sistema de Lista de exclusión federal. El estado asistirá a la conferencia previa a la construcción para garantizar que todos los formularios y certificaciones de igualdad de oportunidades sean firmados por el contratista principal y los subcontratistas y

que se suministre a estos contratistas una lista de obreros con derecho obtenida del Departamento de trabajo del estado. Esta lista permitirá que el contratista cumpla con los requisitos de objetivos de contratación que se establecen en la Sección 3. En esta conferencia, el estado explicará los requisitos de las normas de trabajo de las nóminas semanales y los informes de inspección diaria.

El estado revisará las nóminas presentadas, los formularios de empleados nuevos y existentes, los formularios de autorización de deducciones salariales, etc., así como también podrá realizar entrevistar a los empleados e inspeccionar el proyecto in situ si fuera necesario. Durante la revisión de las nóminas, el estado garantizará que se cumplan todos los requisitos de la Ley Davis-Bacon y de la Ley de horario de trabajo contractual y normas de seguridad (CWHSSA) así como también garantizará el pago de restituciones si fuera necesario. El estado también revisará y procesará los formularios de Pedido de pago (RFP) y los documentos complementarios; también revisará las órdenes de cambio para constatar si los costos son fundados y su correspondencia con el alcance de los trabajos del proyecto.

El estado preparará un Informe de cumplimiento salarial final, acepará levantar gravámenes, realizará los pagos finales y emitirá certificados de aceptación de los trabajos.

Desarrollo económico

Programa de préstamo puente de Louisiana

Bajo la categoría Desarrollo económico especial, se emplearán \$ 332.5 millones para estimular la recuperación económica del estado a corto y largo plazo. De los \$ 332.5 millones, \$ 100 millones se destinarán a la financiación del Programa de préstamo puente de Louisiana (LBLP).

Actividad con derecho	105(a)(17) Desarrollo económico
Objetivo nacional	Ingresos bajo a moderados y necesidad urgente
Monto de la actividad	\$95 millones

El estado ya ha empleado \$ 10 millones de los Fondos de respuesta rápida de la gobernadora para la financiación inicial del LBLP. La respuesta fue abrumadora y los fondos se agotaron en el término de tres semanas. Estos \$ 10 millones asistieron a 407 negocios en 13 parish, la mayoría en la región sudoeste de Louisiana debido a que los negocios allí ubicados pudieron reaccionar más rápidamente que los afectados por Katrina. Estos préstamos no devengan intereses por 180 días. Agotados estos fondos, el estado apartó \$ 30 millones de sus fondos CDBG comprometidos en planes de acción anteriores que son innecesarios a esta altura y no han sido distribuidos aún. El área de cobertura con derecho a participar se amplió de 13 a 37 parish. Se han programado cien

millones de dólares de los nuevos fondos para desastres para esta misma actividad. Una porción de \$ 100 millones será destinada a indemnizar a los bancos por las pérdidas sufridas, y por la quita por el período libre de interés otorgado a los negocios del préstamo flotante inicial de \$10 y \$ 30 millones a los prestatarios que regresaron al área afectada. Se espera que el estado pueda optimizar el uso de los fondos (5 a 1) basándose en la experiencia de Florida con programas similares. Dos millones y medio de fondos adicionales aportados por la Economic Development Administration (Administración de desarrollo económico) también estarán disponibles para mejorar estos programas de garantía.

La mayoría de estos fondos se empleará como garantía de préstamos para pequeñas empresas de las siguientes zonas afectadas por los huracanes: **parish de Acadia, Allen, Ascension, Assumption, Beauregard, Calcasieu, Cameron, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, Iberia, Iberville, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette, Lafourche, Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee, Sabine, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Vermilion, Vernon, Washington, West Baton Rouge y West Feliciana.** Los préstamos se usarán para aportar capital de trabajo temporal a las empresas residentes en las zonas anteriormente mencionadas. Se calcula que 81,000 pequeñas empresas fueron afectadas por los huracanes Katrina y Rita.

Un emprendimiento conjunto entre la DOA, el Louisiana Department of Economic Development (LED – Departamento de desarrollo económico de Louisiana), la Louisiana Public Facilities Authority (Autoridad de instalaciones públicas de Louisiana) y varios bancos participantes ofrecerá una garantía. Los bancos participantes otorgarán préstamos utilizando garantías mediante un proceso de comité de préstamo que será establecido por cada banco. Los bancos administrarán los préstamos avalados por la responsabilidad personal del propietario de la pequeña empresa. El plazo del préstamo es de seis meses y no devenga intereses si se lo cancela un prestatario que reinstala su negocio en el área afectada. Estos fondos se destinarán a pagar el interés a los bancos durante este período de seis meses. En caso de falta de pago por parte del propietario del negocio, el banco procurará obtener el pago mediante un proceso de cobranza. Si el proceso de cobranza resulta infructuoso, se hará efectiva la garantía.

Para poder ser beneficiario de estos fondos, las pequeñas empresas de Louisiana deben haber sufrido pérdidas, daños, evacuación o interrupción de su actividad comercial como consecuencia directa de uno o ambos huracanes. Estos préstamos se otorgan por un monto mínimo de \$ 5,000 y un máximo de \$ 100,000. Los bancos deberán presentar informes trimestrales a la DOA que deberán indicar la cantidad de puestos de trabajo, con mención del nombre del puesto y los salarios, que las empresas crearon o mantuvieron durante el plazo del préstamo.

El LBLP será financiado de conformidad con el objetivo de necesidad urgente. Una vez que la Office of Community Development (OCD) reciba los informes trimestrales sobre la cantidad de puestos creados o mantenidos y la información salarial, el objetivo nacional será evaluado y modificado convenientemente. Se espera que muchos de los puestos de trabajo mantenidos o creados sean desempeñados por personas de ingresos bajos a moderados.

Esta actividad se considera de alto riesgo. El personal recibirá y revisará los informes trimestrales y evaluará los objetivos del programa. Los negocios beneficiados por el programa serán visitados periódicamente al azar para asegurar la exactitud de la información suministrada al estado. Se realizarán auditorías.

Actualmente, se están evaluando y diseñando otros programas de desarrollo económico para incentivar la recuperación económica del estado en las zonas más afectadas por los huracanes Katrina y Rita.

Programas de vivienda

El estado se propone asignar \$ 4,370,000,000 mil millones a programas de vivienda. Varios programas de vivienda patrocinados por el estado se encuentran en proceso de diseño y tienen por objetivo asistir en los esfuerzos de recuperación del estado. A continuación, se detallan los programas actualmente en estudio: Programa de reubicación, reconstrucción y reparación para propietarios de viviendas, Programa de rehabilitación para propietarios de pequeños edificios de alquiler, Low Income Housing Tax Credit (LIHTC – Crédito impositivo para viviendas de bajos recursos), Programa para la construcción de edificios de propiedad horizontal para alquiler, Programas de viviendas asistidas y Programa de préstamos de preurbanización.

Estos programas, que incluirán mejoras tales como métodos de distribución, criterios de selección y de supervisión, serán presentados ante el HUD como una enmienda al Plan de acción en una fecha futura.

Política de desplazamiento

El estado cuenta con una política de desplazamiento que será modificada con anterioridad a su implementación respecto de cualquier actividad que pueda provocar desplazamiento. Es nuestra intención trabajar con Phillip Fortenberry en estas modificaciones para reducir el desplazamiento al mínimo y cumplir con todas las reglamentaciones relacionadas con la Uniform Relocation Assistance and Real Property Acquisition Policies Act (Ley de políticas de asistencia de

reubicación uniforme y de adquisición de bienes raíces) de 1970 y sus enmiendas.

Programa de restauración, reconstrucción y reparación para propietarios de vivienda

Como paso previo a la implementación del Programa de restauración, reconstrucción y reparación para propietarios de vivienda, será necesario solicitar propuestas de servicios profesionales para ayudar al estado en el diseño del programa, los procesos de negocios y el flujo de trabajo para llevar a la práctica los programas de vivienda propuestos así como también para colaborar en el desarrollo de un Sistema de información de gestión.

También se solicitarán inversiones para iniciar la planificación de centros de recuperación de viviendas. Estos centros ayudarán a eliminar los obstáculos para la reconstrucción. El personal será capacitado para asistir a los propietarios de vivienda de modo que puedan resolver las cuestiones burocráticas y regresar rápidamente a sus hogares. Los consejeros asesorarán a los propietarios de vivienda en la obtención de préstamos y en la administración de su deuda y les expondrán todas las opciones a su disposición. El estado pondrá especial énfasis en que los programas de vivienda no presenten obstáculos para la reconstrucción. Se identificarán los obstáculos para la reconstrucción y, en la medida de lo posible, serán eliminados a través del diseño del programa y de los procesos de desarrollados para implementar los programas de vivienda. Se creará un centro de ayuda para registrar y abrir expedientes para los propietarios de vivienda que necesitan asistencia. Los Centros de recuperación de viviendas se instalarán en las zonas más afectadas del estado y serán atendidos por asesores financieros calificados para que suministren información sobre las opciones de refinanciación y la disponibilidad de préstamos y subsidios para reparaciones, reconstrucción o reubicación. Estos centros asistirán a las personas desplazadas, antiguos propietarios o inquilinos, y a los propietarios de vivienda mediante estrategias de creación de viviendas viables. El proceso de contratación de empleados de estos centros debe iniciarse ahora mismo para brindar la asistencia necesaria a miles de inquilinos y propietarios de vivienda desplazados. Se podrá contratar a entidades de vivienda sin fines de lucro que a juicio del estado tengan capacidad para prestar estos servicios.

En este Plan de acción también se ha solicitado que se apruebe la financiación de los costos relacionados con el estudio ambiental necesario para iniciar cualquier tipo de programa de vivienda. Se prevé que 18 parish deberán contar con la aprobación de los requisitos ambientales en toda la extensión de sus territorios.

Actividad con derecho	105(a)(1), (4) y (20) Vivienda
Objetivo nacional	Ingreso bajo a moderado, necesidad urgente y eliminación del deterioro
Monto de la actividad	\$18,000,000

Administración

Estos fondos se destinarán al pago de los costos de administración razonables relacionados con la planificación y ejecución de las actividades de desarrollo de comunidades para la recuperación en caso de desastre. Los costos de administración del programa incluirán los costos del personal y afines necesarios para la administración, coordinación, supervisión, rendición de informes y evaluación general del programa. Esta categoría incluye tanto los costos estatales de administración del programa como los costos de las unidades de los gobiernos locales generales (UGLG) para la administración de subsidios otorgados por el estado. Se asignó una partida de \$ 310,000,000 para gastos de administración. De esa cifra, \$18,450,000 fueron solicitados para la administración de las actividades anteriores.

Actividad con derecho	105(a)(13)
Monto de la actividad	\$18,450,000

Planificación

La LRA determinará las prioridades para el uso de los fondos para desastres del subsidio CDBG. El consejo directivo de la LRA consta de grupos de trabajo en las áreas de desarrollo económico y de fuerza de trabajo, salud, servicios humanos, infraestructura, ambiente, vivienda y educación. Las funciones que desempeñan estos grupos incluyen la elaboración de las mejores prácticas sobre planes estratégicos para guiar los procesos de recuperación y reconstrucción y el uso eficaz de los fondos así como también presentar recomendaciones al consejo directivo de la LRA sobre los programas financiados por el programa CDBG.

La compilación de datos y la investigación de las mejores prácticas serán un papel muy importante de la LRA. Los resultados de estos esfuerzos servirán para determinar prioridades y elaborar programas. La LRA mediante sus grupos de trabajo colaborará con la OCD en el diseño de los programas y las actividades necesarias para alcanzar las metas y objetivos en el plan del estado. Asimismo, la LRA evaluará la evolución de estos programas en cuanto al cumplimiento de sus metas y objetivos.

Actividad con derecho	105(a)(12)
Monto de la actividad	9.500.000

Asistencia técnica

La LRA asistirá a las UGLG en los planes de ayuda y en la implementación de estrategias de recuperación de largo plazo. La OCD dictará talleres iniciales como ayuda para gestionar la solicitud y talleres de implementación dirigidos a los gobiernos locales. Se ofrecerá asistencia técnica específica a todas las UGLG que experimenten problemas de desempeño.

Actividad con derecho	105(a)(19)
Monto de la actividad	\$500.000

Administración de subsidios

Tanto la OCD con la DOA y la LRA tienen previsto contratar más empleados para desempeñar las funciones administrativas relacionadas con las asignaciones complementarias. Las funciones y las responsabilidades de la LRA y la OCD se detallan en un memorando de entendimiento. (Véase el Apéndice 9.) La OCD cuenta con el personal idóneo para capacitar a los nuevos empleados en las reglamentaciones federales y estatales que rigen el programa CDBG. La LRA, por orden de las autoridades ejecutivas y legislativas de Louisiana, tiene la obligación de garantizar el uso coordinado de los recursos destinados a la recuperación y de procurar que tales recursos se empleen con la mayor eficacia y eficiencia. La OCD y la LRA trabajarán codo a codo para lograr esta meta.

El estado cuenta con un plan de supervisión para el programa CDBG normal que se adjunta como Apéndice. El plan sufrirá ciertas modificaciones para dar cabida a las exenciones concedidas al estado y otras disposiciones citadas en la legislación. Se prestará especial atención a garantizar que el uso de los fondos esté relacionado con el desastre sufrido y que los fondos asignados no repitan otros beneficios. El estado asegurará, a través de su proceso de solicitud, la supervisión de beneficiarios y el control por parte del comité de auditoría del consejo directivo de la LRA, que no se repitan los beneficios y que los fondos no se destinen a proyectos o actividades que serán reembolsados mediante fondos aportados por FEMA o el Army Corps of Engineers. El estado, con los recursos de la LRA y bajo su orientación, actuará de forma coordinada con FEMA, Small Business Administration (SBA – Administración para la pequeña empresa), el Corps of Engineers, empresas de seguros y otras entidades, durante el proceso de solicitud para garantizar que no se repitan los beneficios. Los beneficiarios tendrán que firmar una renuncia a sus derechos de privacidad de modo que el estado pueda obtener la información correspondiente de FEMA y SBA.

Procesos en práctica para evitar fraudes, abusos y mala administración

El auditor legislativo se desempeñará como el organismo de control del gasto público; tendrá bajo su control más de 3,500 auditorías de los organismos del estado y gobiernos locales, y de sus empresas cuasi públicas. El hecho de realizar auditorías financieras y de desempeño de los organismos del estado, escuelas y universidades, le permite a estos auditores encontrar formas para mejorar la gestión de gobierno e identificar cuestiones críticas para proteger los recursos públicos y hacer más estrictos los sistemas de control de gobierno. Cuando fuera necesario, podrán realizar el seguimiento de denuncias de fraude, despilfarro o abuso. El auditor legislativo realizará una auditoría anual de la DOA de acuerdo con A-133.

Además, el estado ha creado la Oficina del inspector general. Esta oficina tiene por finalidad ayuda a prevenir el despilfarro, la mala administración, el abuso y la corrupción en el poder ejecutivo del gobierno estatal sin perjuicio de las políticas, alianzas, situaciones o influencias partidarias. El inspector general depende directamente del gobernador.

El consejo directivo de la LRA ha formado una comisión de auditoría que, junto con el personal de auditoría de la organización, deberá asegurar que las tareas de recuperación se realicen en completa armonía con las más estrictas normas éticas. Durante todo el proceso de recuperación, el personal y la comisión de auditoría de la LRA recibirá y revisará los informes presentados por las entidades encargadas de detectar, prevenir y erradicar casos de fraude y abuso.

La Office of Finance and Support Services (OFSS – Oficina de servicios financieros y de apoyo), una dependencia de la DOA, ha definido claramente las responsabilidades para asegurar la separación de funciones. La separación de funciones junto con otras políticas y procedimientos operacionales permiten asegurar que no se podrán cometer fraudes a menos que exista connivencia entre empleados de distintas áreas.

La OFSS es responsable de los pagos, los pedidos de disposición de fondos federales y la rendición de informes financieros estatales y federales. La OCD es responsable de la administración cotidiana del programa CDBG. Su personal examina todos los pedidos de pago y las facturas adjuntas para asegurar que los costos sean razonables y se correspondan con la actividad financiada. Los pedidos de pago deben llevar dos firmas para poder ser presentados ante la OFSS para su pago. Se debe controlar que todos los pedidos cuenten con las firmas autorizadas correspondientes antes de ingresarlos en el sistema financiero para su pago. Un empleado ingresa los pedidos de pago debidamente autorizados en el sistema financiero; el pedido debe ser aprobado en el sistema por el supervisor de la unidad de pagos. Las medidas de seguridad del sistema financiero no permiten que una misma persona ingrese y apruebe un pedido de pago.

La unidad de gestión de pagos de la OFSS suministra información a la unidad de contabilidad de partidas para que se pueda disponer de los fondos federales. El pedido de disposición de fondos federales debe ser examinado y autorizado por un supervisor para que se lo pueda procesar. Todos los fondos se transfieren electrónicamente a la cuenta de depósito central del Tesorero del estado que se empleará para liquidar todas las cuentas por pagar. La unidad de contabilidad de partidas prepara el informe financiero de las actividades de gastos e ingresos. Todos los informes deben ser preparados por un empleado y examinados por el gerente que corresponda antes de su publicación.

Además, el estado contratará un auditor interno en la OCD para que supervise las funciones internas de esta oficina. El auditor dependerá del Comisionado de administración.

El estado se registrará por el State Procurement Code (Código de adquisiciones del estado) y todos los demás beneficiarios secundarios deberán cumplir con las disposiciones de las Partes 84 y 85. El plan de supervisión define los requisitos pertinentes.

Los gobiernos locales, los contratistas y cualquier otra entidad responsable de las actividades de administración de conformidad con este subsidio recibirán capacitación y asistencia técnica.

Participación ciudadana

El estado emplea varias formas innovadoras para lograr la participación de los ciudadanos de Louisiana en el proceso de recuperación y de reconstrucción. El proceso de planificación comunitaria descrito es una de las maneras de aprovechar la opinión de los ciudadanos para formular programas CDBG. En varias reuniones de planificación realizadas junto con FEMA, la necesidad de vivienda, la infraestructura de gobierno y la protección de diques y represas fueron los temas más importantes. Estos comentarios y opiniones constituyeron la base para la toma de decisiones que dieron como resultado los programas considerados en este plan de acción propuesto. El informe completo se puede consultar en www.lra.louisiana.gov.

La participación directa de los ciudadanos también es bienvenida en las reuniones de los grupos de trabajo de la LRA dado que allí se discuten los programas propuestos para ser financiados por el subsidio CDGB. Las resoluciones tomadas por los grupos de trabajo fueron presentadas ante las comisiones de Vivienda, infraestructura y transporte, de Desarrollo económico y de Capacitación de grupos de trabajo que incorporan esta información antes de la elaboración de los programas y su inclusión en los planes de acción.

Los ciudadanos que hayan participado en eventos de planificación comunitaria son parte de una base de datos que se empleará para solicitar su participación en otros planes venideros. Otro mecanismo, el portal de Internet LouisianaRebuilds.info, está en etapa de elaboración y servirá para divulgar información sobre todos los esfuerzos de reconstrucción que la OCD puede aprovechar para reunir más información.

A los estados se le concedieron varias exenciones respecto de las reglamentaciones sobre participación ciudadana, como por ejemplo, el requisito de audiencia pública en los niveles local y estatal, consulta con todas las unidades de gobiernos locales, etc. El estado empleará métodos innovadores para comunicarse con nuestros ciudadanos y para solicitar su opinión sobre los usos propuestos de los fondos de recuperación tras los desastres. Estos comentarios y la respuesta del estado a los mismos nutrirán el Plan de acción y sus enmiendas. Todos los planes y sus enmiendas se deberán publicar en, por lo menos, cuatro periódicos de MSA así como también en los sitios Web de la DOA y la LRA para que se puedan hacer revisiones y comentarios. El estado ha delineado un proceso en la sección "Procedimientos para quejas" del Plan de participación ciudadana del estado que se deberá aplicar a todas las quejas recibidas. (Véase en el Apéndice 10 una copia completa del plan de participación ciudadana.)

Referencias

Brookings Institution, “Katrina’s Window”, octubre de 2005

Brookings Institution, “Katrina Index”, 1º de febrero, 2006

Congressional Budget Office (CBO), Letter to Chairman, 20 de setiembre de 2005

Congressional Research Service (CRS). “Hurricane Katrina: Social Demographic Characteristics of Impacted Areas”, 5 de noviembre de 2005

Emergency Operations Center (EOC), Service Outage Report, 17 de octubre de 2005

LDOL website, www.ldol.state.la.us. Comunicado de prensa “Nonfarm Employment Continued Climb in December”, 25 de enero de 2006

Salamon, L. M. y Geller, S. L., “Louisiana Non-profit Employment: An Update”, John Hopkins Non-profit Employment Data Project, 2005

Scott, Loren C. y Richardson, James A. The Louisiana Economic Outlook: 2006 y 2007, noviembre de 2005.